



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

49^a REUNIÓN – 18^a SESIÓN ORDINARIA
6 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor JOSÉ GENOUD, y del señor vicepresidente 2° del Honorable Senado,
don RUGGERO PRETO

Secretarios:

Señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor RICARDO MITRE y señor JUAN C. OYARZÚN

Prosecretarios:

Señor ALEJANDRO L. COLOMBO, doctor MIGUEL A. FERNÁNDEZ ALIAS,
doctor VICTOR R. VANNINI y señor RODOLFO BERNARDINI

LA REUNION 48ª PERTENECE A SESIONES EN TRIBUNAL



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ANGELOZ, Eduardo C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUM, Daniel
 BAUZÁ, Eduardo
 BRANDA, Ricardo A.
 BRAVO, Leopoldo
 CABANA, Fernando V.
 CANTARERO, Emilio Marcelo
 CARBONELL, José F. Francisco
 CORACH, Carlos Vladimiro
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 DEL PIERO, Pedro
 GAGLIARDI, Edgardo
 GALVÁN, Raúl A.
 GARCÍA ARECHA, José M.
 GENOUD, José
 GIOJA, José L.
 HUMADA, Julio C.
 LEÓN, Luis A.
 LÓPEZ, Alcides H.
 LOSADA, Mario A.
 LOZA, Juan Carlos
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MASSACCESI, Horacio
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MENEGHINI, Javier R.
 MENEM, Eduardo
 MIKKELSEN LÖTH, Jorge F.
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.
 MOREAU, Leopoldo R. G.
 OUDIN, Ernesto

PALACIOS, Gerardo L.
 PARDO, Angel F.
 PRETO, Ruggero
 PRUYAS, Tomás R.
 RAIJER, Beatriz I.
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto
 ROMERO, Marcelo J.
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SÁEZ, José María
 SAGER, Hugo Abel
 SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio A.
 SAPAG, Felipe R.
 SAPAG, Silvia E.
 SERGNESE, Carlos J. A.
 TELL, Alberto Máximo
 ULLOA, Roberto Augusto
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VAQUIR, Omar M.
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNÁ, Carlos Alberto
 VILLARROEL, Pedro G.
 VILLAVARDE, Jorge A.
 YOMA, Jorge R.
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES CON AVISO:

CAFIERO, Antonio F.
 DI PIETRO, Arturo R.
 ORTEGA, Ramón B.

EN COMISION:

MELGAREJO, Juan Ignacio

SUMARIO

1. Izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 5021.)

2. Homenajes:

I. Al **Día de la Alfabetización**. Consideración sobre tablas de un proyecto de declaración (S.-1.927/00). Se aprueba. (Pág. 5021.)

II. Al **Día del Maestro**. Consideración sobre tablas de un proyecto de declaración (S.-1.928 y 1.930/00). Se aprueba. (Pág. 5021.)

3. Asuntos Entrados:

I. **Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado**. (Pág. 5022.)

II. **Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo** por el que se veta la **ley 25.366** (Aranceles para la importación de azúcar) (P.E.-267/00). (Pág. 5022.)

III. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación**. (Pág. 5023.)

IV. **Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados**. (Pág. 5023.)

V. **Comunicaciones de comisiones**. (Pág. 5023.)

VI. **Comunicaciones de señores senadores**. (Pág. 5024.)

VII. **Comunicaciones oficiales**. (Pág. 5024.)

VIII. **Dictámenes de comisiones**. (Pág. 5025.)

IX. **Peticiones particulares**. (Pág. 5027.)

X. **Proyecto de comunicación del señor senador Maglietti** por el que se so-

de la Nación remite resolución sobre **Programas de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas**. Se aprueba. (Pág. 5154.)

65. Consideración del dictamen de la Comisión **Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración** en el expediente **Oficiales Varios 334/99** por el que la **Auditoría General de la Nación** remite resolución sobre el informe "Efectos de la Integración Económica en los Sistemas Urbanos y de Transportes de las Provincias del Litoral y Chaco Argentinos, Región de la Cuenca del Plata", **Contrato de Préstamo ARG-4/93 Fonplata**. Se aprueba. (Pág. 5155.)

66. Consideración del dictamen de la Comisión **Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración** en el expediente **Oficiales Varios 129/98** por el que la **Auditoría General de la Nación** remite resolución sobre análisis de la venta del paquete accionario en el ámbito de **YPF-Refinor S. A.** Se aprueba. (Pág. 5155.)

67. Consideración del dictamen de la Comisión **Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración** en el expediente **Oficiales Varios 431/98** por el que la **Auditoría General de la Nación** remite resolución referida a auditoría realizada en el ámbito del **Instituto Nacional de Alimentos -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-** sobre los mecanismos de control y/o fiscalización sanitaria que se instrumentan para garantizar la salud de la población. Se aprueba. (Pág. 5156.)

68. Consideración del dictamen de la Comisión **Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración** en los expedientes **Oficiales Varios 591 y 791/98** por los que la **Auditoría General de la Nación** remite resoluciones referidas a los servicios de deuda del **Bocon Proveedores** y sobre los servicios de la deuda del **Bocon Previsional** en moneda nacional, primera serie, al 31 de diciembre de 1997 respectivamente. Se aprueba. (Pág. 5158.)

69. Consideración del dictamen de la Comisión **Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración** en los expedientes **Oficiales Varios 778 y 821/98** por los que la **Auditoría General de la Nación** remite resoluciones sobre la determinación de los ajustes de tarifas de peaje aplicables al período agosto de 1996 abril de 1997 y en la conformación de los montos de compensación indemnizatoria de 1997, en el ámbito del órgano de Control de las **Concesiones Viales**. Se aprueba. (Pág. 5159.)

70. Consideración del dictamen de las comisiones de **Presupuesto y Hacienda** y de **Combusti-**

bles en el proyecto de ley del señor senador **Sala** y otros señores senadores por el que se deroga parcialmente el decreto 434/00 en lo que respecta a instruir a la **AFIP** acerca del procedimiento a aplicar para la exención del impuesto a los combustibles (S.-1.185/00). Se aprueba. (Pág. 5161.)

71. Consideración del dictamen de la Comisión de **Relaciones Exteriores y Culto** en el mensaje y proyecto de ley del **Poder Ejecutivo** por el que se aprueba la **Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores** (P.E.-98/00). Se aprueba. (Pág. 5163.)

72. Consideración del dictamen de la Comisión de **Relaciones Exteriores y Culto** en el mensaje y proyecto de ley del **Poder Ejecutivo** por el que se aprueban las Enmiendas al **Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono** (P.E.-142/00). Se aprueba. (Pág. 5170.)

73. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de **Presupuesto y Hacienda, de Economía, de Trabajo y Previsión Social y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa** en el proyecto de ley en revisión sobre normas para combatir la evasión tributaria y previsional (C.D.-70 y 74/00). Se aprueba. (Pág. 5174.)

74. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador **Meneghini**. (Pág. 5193.)

75. Manifestaciones de varios señores senadores. (Pág. 5193.)

76. Continuación de la consideración de la ley de evasión tributaria y previsional. (Pág. 5195.)

77. Manifestaciones de varios señores senadores. (Pág. 5197.)

78. Continuación de la consideración de la ley de evasión tributaria y previsional. (Pág. 5199.)

79. Manifestaciones de varios señores senadores. (Pág. 5200.)

80. Continuación de la consideración de la ley de evasión tributaria y previsional. Se aprueba. (Pág. 5201.)

81. Continuación de la consideración del tema al que se refiere el punto 7 de este sumario. (Página 5219.)

82. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de **Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, de Economía, de Asuntos Administrativos y Municipales** y de

se, en la IX Conferencia de las partes, entre los días 15 y 17 de septiembre de 1997, fueron aprobados cuatro anexos modificatorios. De ellos tres se refieren a ajustes relativos a las sustancias controladas enumeradas en los Anexos A, B y E del Protocolo y uno sobre enmiendas al artículo 4º, por los que se establecen nuevas limitaciones a la utilización de sustancias que deterioran la capa de ozono y tiene como finalidad controlar la producción.

Hoy en día la capa de ozono se halla amenazada por un rápido incremento en la concentración de determinadas sustancias químicas, como algunas clases de clorofluorocarbonos, el metano, el óxido nítrico, el tetracloruro de carbono, el metilclorofórmico, los hidroclorofluorocarbonos, los hidrobromofluorocarbonos o el bromuro de metilo, en los que inciden las actividades necesarias para el progreso humano como las industriales, las agrícolas, e incluso la utilización de vehículos y aeronaves.

En esencia en las enmiendas que estamos considerando se acordó un calendario para la eliminación progresiva del uso del bromuro de metilo, pesticida de gran capacidad destructora del ozono.

Gracias a ese acuerdo, los países desarrollados deberán eliminar su consumo de bromuro de metilo en el año 2005, con excepciones para usos esenciales. El acuerdo alcanzado conlleva reducciones intermedias. Los países firmantes tendrán que reducir el consumo de ese producto en un 25 por ciento de aquí al año 1999, en un 50 por ciento hasta el año 2001 y en un 70 por ciento hasta el 2003. Hasta ahora el Protocolo de Montreal preveía que los países ricos eliminaran el bromuro de metilo en el 2010, con reducciones de un 25 por ciento de su uso en el 2001 y de un 50 por ciento en el 2005.

El nuevo acuerdo del Protocolo de Montreal prevé que los países en vías de desarrollo eliminen el consumo de bromuro de metilo en el año 2015, con una reducción intermedia de un 20 por ciento de aquí al año 2005. Los países en vías de desarrollo hasta ahora tenían únicamente el plazo del año 2002, en el que debían congelar su consumo de bromuro de metilo.

Los representantes de más de un centenar de países —de los 162 firmantes del Protocolo de Montreal— aprobaron también la creación de un sistema de creación del comercio de los clorofluorocarburos (CFC) y otras sustancias que dañan al ozono, con lo que se facilitará la lucha contra su tráfico ilegal.

Otro de los acuerdos de la reunión fue que el Fondo Multilateral destine 25 millones de dólares anuales durante 1998 y 1999 para actividades de eliminación del bromuro de metilo en países en vías de desarrollo. Esa aportación se une a los 10 millones de dólares acordados el año pasado para la financiación de proyectos de demostración que evalúen la eficacia de las alternativas al bromuro de metilo.

Estas medidas conseguirían reducir el efecto de cambio climático acelerado que está sufriendo nues-

tro plantea, y que está provocado por la acción del hombre sobre su entorno. Está en nuestras manos la posibilidad de frenarlo de manera inteligente y constructiva.

Las consecuencias de nuestras decisiones se dejarán sentir inmediatamente si este esfuerzo es concertado. Los problemas medioambientales no tiene fronteras, afectan a todos. Por esta razón, es preciso contar con información y ejercitar la vigilancia sobre los intercambios comerciales de los productos que agotan la capa de ozono y los incumplimientos de los acuerdos adoptados.

Por todo lo expuesto y recordando que la protección ambiental tiene a partir de 1994 status constitucional gracias al artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, solicito la aprobación del presente proyecto de ley ratificatorio.

73

EVASION TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sr. Presidente (Genoud). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía, de Trabajo y Previsión Social y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de ley en revisión sobre normas para combatir la evasión tributaria y previsional, expedientes C.D.-70 y 74/00.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía, Trabajo y Previsión Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa han considerado el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo el número C.D.-70/00 y 74/00 sobre normas para combatir la evasión tributaria y previsional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Limitación a las transacciones en dinero en efectivo

Artículo 1º— No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos diez mil (\$ 10.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con

fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8º de la presente, que no fueran realizados mediante:

1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjetas de crédito.
5. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo.

Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en expedientes que por ante ellos tramiten.

Art. 2º- Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acrediten la veracidad de las operaciones.

En el caso del párrafo anterior, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Art. 3º- El Poder Ejecutivo dentro del primer año de vigencia de la presente ley, podrá reducir el importe previsto en el artículo 1º a pesos cinco mil (\$ 5.000).

De los registros

Art. 4º- Incorpórase como artículo 3º bis de la ley 17.801 el siguiente:

Artículo 3º bis: No se inscribirán o anotarán los documentos mencionados en el artículo 2º inciso a), si no constare la clave o código de identificación de las partes intervinientes otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, de corresponder.

Art. 5º- Sustitúyense el inciso e) y el apartado 2 del inciso g) del artículo 20 del decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 (texto ordenado por decreto 1.114/97), por los siguientes textos:

- e) Nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, domicilio, documento de identidad, y clave o código de identificación otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también razón social, inscripción, domicilio y clave o código de identificación, en el caso de las personas jurídicas.
- g) 2. De transferencia de dominio con los datos personales o sociales, domicilio,

documentos de identidad y clave o código de identificación del adquirente

Art. 6º- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 1º inciso b) del anexo A de la ley 19.170, el siguiente texto:

Se efectuará anotación provisoria por el plazo que fije la reglamentación de aquellos documentos en que no constare la clave o código de identificación de las partes intervinientes, otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, de corresponder.

Art. 7º- Incorpórase como inciso g) del artículo 19 del decreto 4.907/73 el siguiente texto:

- g) Clave o código de identificación de las partes intervinientes otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Del cheque cancelatorio

Art. 8º- El cheque cancelatorio es un instrumento emitido por el Banco Central de la República Argentina en las condiciones que fije la reglamentación y constituye por sí mismo un medio idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero, teniendo los mismos efectos que los previstos para dichas obligaciones en el Código Civil.

Art. 9º- El Banco Central de la República Argentina determinará las condiciones bajo las cuales los cheques cancelatorios serán vendidos al público a través de dicha institución o de las autoridades financieras por él autorizadas.

Art. 10.- El cheque cancelatorio produce los efectos del pago desde el momento en que se hace tradición del mismo al acreedor, a quien se le transmite mediante endoso nominativo. Serán admisibles, además, hasta dos (2) endosos nominativos. Los endosos serán certificados por escribano público o autoridad judicial.

Art. 11.- La autoridad de aplicación del presente capítulo será el Banco Central de la República Argentina, quien deberá dictar las normas correspondientes, inclusive el procedimiento para el caso de extravío o sustracción, en el plazo de treinta (30) días de promulgada la presente ley.

CAPÍTULO II

Sistema de medición de producción primaria

Art. 12.- Todas las plantas industriales de faena de hacienda y molienda de trigo tendrán la obligación para su funcionamiento, de incorporar sistemas electrónicos de medición y control de la producción, inclusive sistemas que funcionen en tiempo real de conformidad con las normas que dicte la autoridad de aplicación

Facúltase a la autoridad de aplicación a establecer sistemas electrónicos de medición y control de

la producción, para otras etapas de la misma y para otras especies de origen animal y vegetal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) —de acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias— serán las autoridades de aplicación del presente artículo, debiendo establecer las normas indicadas en el primer párrafo y los procedimientos que le permitirán a la AFIP obtener y analizar la información recibida a efectos de mejorar los controles fiscales; y a la SAGPyA, obtener los datos estadísticos y de seguimiento de la producción.

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias

Art. 13.— Las autoridades de aplicación establecerán el sistema previsto en este capítulo pudiendo incorporar un régimen de excepciones para pequeños productores o emprendimientos de estructura familiar.

CAPÍTULO III

Sobre el régimen de recaudación de los aportes y contribuciones previsionales

Art. 14.— Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar una comisión de hasta el 0,7 % del total de la recaudación correspondiente a los aportes personales destinados al régimen de capitalización de la ley 24.241 y de las contribuciones patronales de la ley 24.557.

Esta comisión se establece para la atención del gasto que demandan las funciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos y estará a cargo de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y de las aseguradoras de riesgos de trabajo, quienes lo abonarán previo a la transferencia de los recursos que correspondan. A este solo efecto ratifícase el decreto 863 del 27 de julio de 1998.

CAPÍTULO IV

Régimen especial para la determinación y percepción de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social para las pequeñas y medianas empresas constructoras

Sujetos y objeto

Art. 15.— Establécese un régimen especial para la determinación, percepción y pago de los aportes y contribuciones que, por su personal en relación de dependencia y con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social, efectúen las empresas constructoras con facturación anual inferior a la suma que a tal efecto determine la reglamentación, con personal en relación de dependencia comprendido en el ámbito personal de aplicación de la ley 22.250 y sus modificaciones para la realización de las obras indi-

cadadas en el artículo 16 y conforme a los requisitos, plazos y condiciones que se indican en la presente ley.

Art. 16.— Quedan comprendidas en el régimen que por la presente ley se instaure, las empresas indicadas en el artículo 15, cualquiera fuera su forma jurídica, incluidas las empresas unipersonales, las uniones transitorias de empresas o cualquier otra forma de asociación, que actúen como locatarios en las locaciones que se indican a continuación:

- a) Locaciones encuadradas en el inciso a) del artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado según la ley 23.349 y sus modificaciones. A estos fines deberán agruparse todas las obras contratadas entre las mismas partes “comitente y contratista” en la medida en que las fechas de ejecución de los respectivos contratos estén comprendidas en el mismo período ya sea parcial o totalmente;
- b) Obras públicas sobre inmuebles de cualquier naturaleza (obras, instalaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación). A estos fines constituyen obras públicas aquellas cuya realización sea encomendada por cualquiera de los poderes del Estado (nacional, provincial o municipal), sus entes descentralizados y/o autárquicos, las empresas y sociedades contempladas en el artículo 1º de la ley 22.016, y demás entes que tengan delegadas atribuciones o competencias públicas por expreso mandato legal, cualquiera sea su forma organizativa, incluidas las concesionarias de obras y servicios públicos.

Agentes de determinación e ingreso

Art. 17.— Las empresas de la industria de la construcción y las empresas concesionarias de servicios públicos cualquiera fuera su forma jurídica, incluidas las empresas unipersonales, las uniones transitorias de empresas por cualquiera de las empresas que la integran o cualquier otra forma de asociación, que de acuerdo con su último balance y estado de resultados hubieran tenido una facturación anual igual o superior a la que a tal efecto determine la reglamentación tendrán a su cargo la responsabilidad de calcular, y determinar la obligación previsional a cuenta creada por esta ley, que corresponda a los contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, respecto de la totalidad del personal dependiente de éstas que resulte afectado a la obra contratada.

Art. 18.— Cuando el contratista principal fuere una empresa de la industria de la construcción que por su facturación anual quede comprendida en el régimen especial, la determinación de la obligación previsional a cuenta según este régimen se limitará a los correspondientes a su personal propio bajo relación de dependencia. En este caso, la contratista principal no tendrá obligación alguna de actuar en calidad de agente de determinación e ingreso de las obligacio-

nes correspondientes a los subcontratistas.

Cada subcontratista deberá autodeterminar su obligación según los procedimientos del régimen especial y efectuar el ingreso de la obligación previsional a cuenta de acuerdo con las disposiciones que, a tal efecto, instrumente la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía

Exclusión del régimen

Art. 19.— Los agentes de determinación e ingreso comprendidos en el artículo 17 continuarán determinando y pagando los aportes y contribuciones al Sistema Unico de la Seguridad Social correspondiente a sus empleados, según las leyes del régimen general.

Art. 20.— El presente régimen especial no será de aplicación respecto del personal dependiente de aquellos contratistas o subcontratistas que se encuentren adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes instituido por la ley 24.977 y su modificación.

Obligación previsional a cuenta. Obligaciones comprendidas

Art. 21.— Los ingresos que se originen como consecuencia de la aplicación del presente régimen especial para las empresas contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción, serán imputados como pago a cuenta de las siguientes obligaciones referidas a los recursos de la seguridad social:

- a) La contribución a cargo del empleador al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- b) La contribución a cargo del empleador con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;
- c) La contribución a cargo del empleador con destino al régimen nacional de asignaciones y subsidios familiares y al Fondo Nacional de Empleo;
- d) La contribución a cargo del empleador con destino al régimen nacional de obras sociales y al régimen nacional del seguro de salud;
- e) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- f) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;
- g) El aporte personal del empleado en relación de dependencia con destino al régimen nacional de obras sociales y al régimen nacional del seguro de salud.
- h) Los aportes personales del trabajador no podrán ser superiores a los que, de acuerdo con los porcentajes vigentes, correspondan a su salario conforme la liquidación de haberes.

Oportunidad en que corresponde practicar la determinación e ingreso

Art. 22.— Las empresas que en virtud de lo previsto por el artículo 17 de la presente ley deban actuar como agentes de determinación de ingreso de la cotización previsional a cuenta con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social respecto del personal de las empresas contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción, deberán efectuar la determinación e ingreso al fisco de los correspondientes importes con una periodicidad mensual y según los plazos y modalidades que a tal efecto instrumente la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía

Art. 23.— Cuando los importes determinados e ingresados al fisco por las empresas en virtud del régimen especial, correspondan a trabajos en curso de ejecución respecto de los cuales no se hubiere extendido aún a los contratistas y subcontratistas los certificados de aceptación definitivos, tales importes constituirán un crédito a favor del agente de determinación e ingreso, que podrá descontarse de los pagos que deba efectuar a los contratistas.

Art. 24.— Las empresas que deban actuar como agentes de determinación e ingreso en virtud del régimen especial asumen la responsabilidad personal por deuda ajena, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria con los empleadores por el ingreso de la obligación previsional.

La inscripción de los contratistas y subcontratistas en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, no exime de la responsabilidad solidaria ante las obligaciones de la presente ley.

A todos los efectos de la presente ley subsiste la responsabilidad solidaria establecida en los artículos 30 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones y el 32 de la ley 22.250.

Art. 25.— El cálculo de las obligaciones emergentes del presente régimen deberá efectuarse, obligatoriamente en forma mensual. A tal efecto, si el comitente no es agente de determinación e ingreso, corresponderá a la contratada autodeterminar e ingresar al fisco las obligaciones emergentes del presente régimen, siempre y cuando ella sea una empresa constructora y quede comprendida en lo dispuesto por el artículo 15 de la presente.

Cálculo de las obligaciones emergentes del régimen especial. Base de la obligación previsional a cuenta

Art. 26.— La obligación previsional a cuenta será determinada por la autoridad de aplicación de acuerdo con:

- a) Las alícuotas correspondientes a los aportes y contribuciones al Sistema Unico de la

Seguridad Social vigentes, con la pertinente disminución que corresponda al lugar de emplazamiento de la obra;

- b) Los valores referenciales mensuales que se les asignen a las categorías laborales contempladas en el anexo 1 de esta ley;
- c) El período mensual laborado que será la cantidad de días con alta del trabajador en relación de dependencia dentro del mes calendario.

Art. 27.— A los efectos del cálculo de la obligación previsional a cuenta, las empresas contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción comprendidas en el régimen quedan obligadas a suministrar a la contratista principal, en su condición de agente de determinación e ingreso la siguiente información:

- a) El listado nominativo de su personal identificado según número de clave única de identificación laboral (CUIL) y organizado según las categorías laborales definidas en el anexo 1;
- b) El detalle de la cantidad de días con alta del trabajador integrante del listado nominativo antes mencionado durante el mes calendario a declarar;
- c) El detalle de las asignaciones familiares pagadas durante el período informado.

Asimismo deberán presentar a la contratista principal constancia de haber depositado el correspondiente aporte a cargo del empleador con destino al Fondo de Desempleo de la Industria de la Construcción.

• Art. 28.— Los importes recaudados a través del régimen especial serán distribuidos mensualmente entre los distintos sistemas y regímenes enunciados en el artículo 21, de acuerdo a la proporción que a cada uno de ellos le corresponda en la Contribución Unificada de la Seguridad Social y conforme a los porcentajes de aportes y contribuciones que corresponda; resultando base para el cálculo de las compensaciones y liquidaciones adicionales que las leyes vigentes establecen.

Art. 29.— Las empresas indicadas en el artículo 15, al final de obra o, en su caso, semestralmente si la duración de la misma fuera superior a dicho lapso, deberán presentar la declaración jurada determinativa de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social, correspondiente al régimen general, por los trabajadores ocupados en la misma, sobre la base de las remuneraciones imponibles realmente abonadas.

La obligación previsional a cuenta, efectivamente ingresada, será imputada a cancelar el saldo de la declaración jurada indicada en el párrafo anterior, y en ningún caso generará saldo a favor del contribuyente.

Prestaciones de la seguridad social

Art. 30.— El personal de las empresas de la industria de la construcción comprendidas en el presente régimen, tendrá derecho a la totalidad de las prestaciones de la seguridad social contempladas en las leyes 24.241 y sus modificaciones, 24.714 y su modificatoria, 19.032 y sus modificaciones, 23.660 y sus modificaciones y 23.661 y sus modificaciones.

Art. 31.— Establécese que el régimen que se crea por este capítulo, regirá a partir de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.

En los supuestos que no resulte aplicable el presente régimen simplificado, la Administración Federal de Ingresos Públicos aplicará, en el marco de las facultades que le son propias un régimen de retención sobre los pagos que el comitente realice a cualquier contratista o subcontratista de la industria de la construcción. Tales retenciones se considerarán pagos a cuenta de las obligaciones destinadas a la Contribución Unificada de la Seguridad Social.

Anexo 1. *Categorías laborales*: serenos, ayudantes, medio oficial, oficial, oficial especializado, oficial múltiple (trabajadores especializados no comprendidos en las categorías precedentes).

CAPÍTULO V

Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)

Art. 32.— Ratifícase la creación del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). El Poder Ejecutivo deberá, dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente, dictar la reglamentación pertinente

Art. 33.— Los organismos de la administración pública nacional, centralizada o descentralizada, guardarán en cada caso la obligación de confidencialidad que en virtud de las leyes especiales que los regulan resulte aplicable.

Art. 34.— El gobierno nacional suscribirá con los estados provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los convenios destinados a poner en funcionamiento en las respectivas jurisdicciones, sistemas de información complementarios al SINTyS, estableciéndose mecanismos de interacción entre ellos.

Art. 35.— El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), se integrará con la información proveniente, entre otros, de: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Registro Nacional de las Personas, Inspección General de Justicia, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de Buques, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, registros públicos de comercio, Sistema Unico de Identificación y Registro de las Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM), Padrón Unico de Beneficiarios de los Programas So-

ciales (PUBPS), Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y organismos provinciales, previo convenio de adhesión.

Art. 36.— La Jefatura de Gabinete de Ministros, como organismo rector del sistema y previa consulta a los entes mencionados en el artículo 35, establecerá las pautas y los estándares técnicos necesarios para posibilitar el intercambio y cruzamiento de datos entre los organismos públicos mencionados en el artículo precedente, preservando los principios de privacidad, confidencialidad y seguridad.

CAPÍTULO VI

Exportación de cigarrillos y combustibles

Art. 37.— Cuando se exporten cigarrillos o se incorporen a la lista de “rancho” de buques afectados al tráfico internacional o de aviones de líneas aéreas internacionales, la exención dispuesta en el artículo 10 de la ley 24.674 de Impuestos Internos y sus modificaciones y las que resultan por aplicación de dicha norma respecto de los gravámenes establecidos por la Ley Nacional del Tabaco 19.800 y sus modificaciones y la Ley del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio de Venta de Cigarrillos 24.625 y sus modificaciones sólo se harán efectivas mediante un régimen de devolución de los mencionados tributos a los sujetos responsables de los mismos.

Idéntico tratamiento al previsto en el párrafo anterior tendrán las operaciones comprendidas en el mismo que tengan como destino el Area Franca o el Area Aduanera Especial definidas por la ley 19.640 y sus modificaciones o las zonas francas creadas en el marco de la ley 24.331 y sus normas modificatorias y complementarias.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá dentro del plazo de ciento veinte (120) días la forma, plazo y condiciones en las que se instrumentará el presente régimen y los organismos competentes que deberán proceder a la devolución de los referidos gravámenes.

Art. 38.— A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la liquidación y pago de los impuestos comprendidos en el mismo, se practicará conforme a las disposiciones legales aplicables a los productos gravados.

Art. 39.— Los paquetes de cigarrillos comprendidos en el presente régimen deberán llevar adheridos los instrumentos fiscales de control establecidos por el artículo 3º de la ley 24.674 de impuestos internos y sus modificaciones, en los que deberá constar sobreimpresa la leyenda “Consumo exento”. En cada paquete deberá asimismo consignarse la leyenda impresa “Sólo para exportación-Prohibida su venta en el territorio argentino”

Art. 40.— La mera detección de estos productos dentro del territorio nacional en las cantidades que establezca la reglamentación hará presumir de ple-

no derecho que fueron introducidos por cualquier forma de contrabando, determinando esta circunstancia el inicio de las acciones administrativas y penales que correspondieren, respecto del poseedor de los productos en contravención.

Art. 41.— Cuando en las exportaciones de cigarrillos y combustibles líquidos se constatare que la declaración efectuada por el exportador difiere de lo que resulta de la comprobación realizada por el servicio aduanero sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por los ilícitos que se hayan cometido, se impondrá al exportador una multa igual a cinco (5) veces el importe de los impuestos internos o el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural que se hubiesen eximido y/o reintegrado, en caso de haber pasado inadvertida la maniobra. A esos efectos, será de aplicación el procedimiento previsto en el Código Aduanero.

El presente será también de aplicación respecto de las exportaciones de cualquier mezcla de hidrocarburos, tengan o no un destino combustible, incluyéndose a los solventes alifáticos y/o aromáticos y/o aguarrás y/o condensado y/o gasolina natural y a los productos químicos y petroquímicos resultantes de la utilización de los mencionados cortes o productos como materia prima y respecto de las destinaciones previstas en el inciso b) del artículo 7º de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones; extendiéndose la responsabilidad del exportador hasta la verificación del cumplimiento de la destinación aduanera declarada.

En los casos en los que las mercaderías a las que se refiere en los párrafos anteriores fuesen sometidas a la destinación suspensiva de tránsito de exportación, contemplada en los artículos 374 al 385 del Código Aduanero la sanción allí prevista será aplicable al exportador cualquiera que fuere el lugar en el que se produzca la constatación, sea tanto en la aduana en la que se ha formalizado la destinación de exportación, como en la aduana de salida, o bien en el trayecto que ha seguido la mercadería entre ambas.

Será título suficiente para habilitar la vía de ejecución fiscal la boleta de deuda que expida la Administración Federal de Ingresos Públicos.

CAPÍTULO VII

Impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural

Art. 42.— Modifícase la ley 23.966, título III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones de la forma que a continuación se establece, debiendo el Poder Ejecutivo nacional adecuar a la misma el régimen de registro y comprobación de destino establecido por el inciso c) del artículo 12 de la ley 25.239, computándose el plazo previsto en el primer párrafo del artículo incorporado por el mencionado

inciso a la ley 23.966, a partir de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley:

- a) Sustitúyese el inciso c) del primer párrafo del artículo 7º por el siguiente:

Tratándose de solventes aromáticos, nafta virgen y gasolina natural o de pirólisis u otros cortes de hidrocarburos o productos derivados, tengan como destino el uso como materia prima en los procesos químicos y petroquímicos que determine taxativamente el Poder Ejecutivo nacional en tanto de estos procesos derive una transformación sustancial de la materia prima modificando sus propiedades originales o participen en formulaciones, de forma tal que se la desnaturalice para su utilización como combustible y tratándose de hexano, tenga como destino su utilización en un proceso industrial para la extracción de aceites vegetales y en tanto estos productos sean adquiridos en el mercado local o importados directamente por las empresas que los utilicen para los procesos indicados precedentemente y en tanto quienes efectúen dichos procesos acrediten ser titulares de las plantas industriales para su procesamiento. La exención prevista será procedente en tanto las empresas beneficiarias acrediten los procesos industriales utilizados, la capacidad instalada, las especificaciones de las materias primas utilizadas y las demás condiciones que establezca la autoridad de aplicación para comprobar inequívocamente el cumplimiento del destino químico o petroquímico o del destino industrial de extracción de aceites vegetales declarado, como así también los alcances de la exención que se dispone.

- b) Sustitúyese el artículo agregado a continuación del artículo 9º por el siguiente:

Artículo ... : Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para establecer un régimen por el cual se reintegre el impuesto de este título a quienes, no estando alcanzados por el inciso c) del artículo 7º, les hubiere sido liquidado y facturado el mencionado impuesto por la adquisición de solventes alifáticos y/o aromáticos y aguarrrás, siempre que lo utilicen como materia prima en la elaboración de productos químicos y/o petroquímicos, o como insumo en la producción de tinners, adhesivos, tintas gráficas, industria del caucho, ceras o como insumos de los denominados genéricamente diluyentes que sean utilizados a su vez como insumos en otros procesos industriales o para otros usos no combustibles; en tanto se acredite, con el alcance que determine la reglamentación, que dicho proceso o uso requiere la formulación de un diluyente con determinadas especifica-

ciones, que deberán ser aprobadas previo a su comercialización.

Dicha devolución no podrá exceder el plazo de los diez (10) días posteriores a la fecha en la que el gravamen debió haber sido ingresado por los responsables del mismo o desde la fecha de presentación de la solicitud de reintegro si ésta se hubiere efectuado con posterioridad; en tanto la respectiva solicitud de reintegro hubiera sido aprobada con anterioridad al plazo fijado.

Cuando condiciones particulares de un sector industrial lo justifiquen, el Poder Ejecutivo podrá establecer un régimen de avales a efectos de sustituir el ingreso del gravamen del título, en las condiciones que determine la reglamentación.

- c) Incorpórase a continuación del artículo sin número agregado a continuación del artículo 9º, el siguiente:

Artículo ... : Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer métodos físico-químicos que permitan distinguir en forma inequívoca los cortes de hidrocarburos y/o productos con el destino indicado en el artículo precedente los que serán de su uso obligatorio en las plantas de los productores y/o importadores en las condiciones que reglamente la autoridad competente. Asimismo, y para asegurar que los cortes de hidrocarburos y/o productos declarados con el destino indicado en el artículo precedente, no sean derivados a su uso como combustible, el Poder Ejecutivo deberá establecer sistemas de verificación obligatorios por parte de los titulares de estaciones de servicio.

Lo expuesto corresponde a los efectos previstos en el artículo 12, inciso d) de la ley 25.239 incorporada como capítulo VI a la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. El Poder Ejecutivo determinará asimismo los organismos con competencia para efectuar las respectivas verificaciones en la cadena de comercialización.

- d) Incorpórase a continuación del artículo 7º, el siguiente:

Artículo ... : La exención dispuesta en el inciso d) del artículo 7º de la presente ley se materializará mediante el siguiente sistema: El Poder Ejecutivo nacional establecerá un Régimen de Registro y Comprobación de Origen y Destino para el combustible exento según el inciso d) del artículo 7º de la presente ley, el que tendrá por objeto realizar el control sistemático de dichos combustibles identificando todas las etapas: origen, transporte, puesto de control, descarga y auditoría externa de todo el procedimiento.

El presente régimen se registrará por las siguientes pautas generales:

- a) Deberán inscribirse en el Registro quienes produzcan, utilicen, distribuyan, almacenen, transporten, realicen la venta minorista o intervengan en cualquier etapa de la cadena de comercialización de los productos tratados por la presente ley 23.966, título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con el destino exento establecido por su artículo 7º, inciso d);
- b) La incorporación en el registro condiciona tanto la habilitación de los responsables para intervenir en la cadena de comercialización, tanto como la posterior comprobación de los destinos exentos de los productos;
- c) Las operaciones exentas sólo estarán permitidas entre registrados;
- d) La verificación del régimen estará sujeta a la auditoría de la Auditoría General de la Nación, en tanto que el control final estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- e) Las empresas responsables pondrán a disposición de la AFIP la información estadística probatoria de los movimientos de combustible y toda documentación respaldatoria que identifique los productos exentos por el inciso d) de la presente ley.

A los efectos de la implementación del sistema de verificación y control, la Autoridad de Aplicación adoptará las siguientes medidas:

1. Establecer puestos de control permanente de ingreso y salida de transporte de combustible en:

- a) Puesto policial de la provincia del Chubut de Arroyo Verde en ruta nacional 3, límite de las provincias de Chubut y Río Negro;
- b) Puesto de Gendarmería nacional en ruta 258 en Río Villegas o nueva zona según ampliación de zona exenta a San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes;
- c) Localidad de Sierra Grande;
- d) Puertos al sur de Sierra Grande, provincia de Río Negro;
- e) Las destilerías registradas que sean proveedoras del combustible exento según el inciso d) del artículo 7º de la ley.

2. La Autoridad de Aplicación destinará los recursos necesarios para la implementación

del sistema mencionado, cubriendo remuneraciones, viáticos, sistemas informáticos y de comunicación y costos de auditoría.

CAPÍTULO VIII

Normas referidas a las relaciones laborales y el empleo no registrado

Art. 43.— Agrégase como artículo 132 bis de la ley 20.744 (texto ordenado por decreto 390/76) el siguiente:

Artículo 132 bis: Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal.

Art. 44.— Agrégase como segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, el siguiente texto:

Sin perjuicio de ello, si una o ambas partes pretendieren que no se encuentran alcanzadas por las normas que establecen la obligación de pagar o retener los aportes con destino a los organismos de la seguridad social, o si de las constancias disponibles surgieren indicios de que el trabajador afectado no se encuentra regularmente registrado o de que ha sido registrado tardíamente o con indicación de una remuneración inferior a la realmente percibida o de que no se han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones, la autoridad administrativa o judicial interviniente deberá remitir las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de

que la misma establezca si existen obligaciones omitidas y proceda en su consecuencia.

La autoridad judicial o administrativa que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incurso en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos.

En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgará la autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubieran celebrado, pero no les hará oponibles a los organismos encargados de la recaudación de los aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinados a los sistemas de la seguridad social, en cuanto se refiera a la calificación de la naturaleza de los vínculos habidos entre las partes y a la exigibilidad de las obligaciones que de esos vínculos se deriven para con los sistemas de seguridad social.

Art. 45.— Agrégase como último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto ordenado por decreto 390/76), el que sigue:

Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.

Art. 46.— Agrégase como último párrafo del artículo 132 de la ley 18.345 (texto ordenado por decreto 106/98) el que sigue:

Si por sentencia firme o ejecutoriada se estableciere que el actor es un trabajador dependiente y esa condición hubiera sido desconocida por la empleadora en su contestación de demanda, o si la fecha de ingreso del trabajador establecida en la sentencia fuera anterior a la que alegara su empleador, o si de cualquier otro modo se apreciare que el empleador hubiera omitido ingresar en los organismos pertinentes los aportes o las contribuciones correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social, el secretario del juzgado interviniente deberá remitir los autos a la Administración Federal de Ingresos Públicos a

efectos de la determinación y ejecución de la deuda que por aquellos conceptos se hubiera generado. Antes de hacer efectiva esa remisión deberá emitir los testimonios y certificaciones necesarios para hacer posible la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia hasta la efectiva satisfacción de los créditos deferidos en condena.

El secretario que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incurso en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos.

Art. 47.— Modifícase el artículo 11 de la ley 24.013, el que tendrá en lo sucesivo el siguiente texto:

Las indemnizaciones previstas en los artículos 8º, 9º y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones:

- a) Intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y
- b) Proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior.

Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8º, 9º y 10 de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia.

Art. 48.— Agrégase al artículo 2º de la ley 23.789 un nuevo inciso, cuyo texto es el que sigue:

- d) El trabajador dependiente o la asociación sindical que lo represente, para enviar a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento enviado a su empleador en los términos del inciso b) del artículo 11 de la ley 24.013.

CAPÍTULO IX

Otras disposiciones

Art. 49.— Establécese la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 37, 52 y, en su caso, del capítulo XV de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, respecto de los

aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social que se encuentren total o parcialmente impagos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 50.— Hasta tanto el Poder Ejecutivo no ejerza las facultades de reglamentación de los sistemas de control referidas en el artículo 42 de la presente, la exención establecida en el artículo 7° incisos c) y d) de la ley 23.966 (t.o. 1998 y sus modificatorias) continuará materializándose en la forma y con los mecanismos de contralor vigentes a la fecha de sanción de esta ley.

Art. 51.— Modifícase el artículo 46 de la ley 24.921 de transporte multimodal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 46: *Admisión temporaria de contenedores.* A efectos de racionalizar la utilización de los contenedores de matrícula extranjera se establece como límite del régimen de admisión temporaria de los mismos, el plazo de cuatrocientos ochenta (480) días corridos.

Vencido el plazo señalado, la autoridad aduanaera procederá a penalizar al responsable de la admisión temporaria del contenedor con una multa diaria de cien pesos (\$ 100), por un plazo máximo de noventa (90) días, vencido el cual se procederá al remate del contenedor en infracción.

El Poder Ejecutivo reglamentará por única vez una condonación de las multas que corresponda aplicar a los responsables de contenedores ingresados al país bajo el régimen de admisión temporaria. Para obtener el beneficio de la condonación el responsable del contenedor con la admisión temporaria vencida deberá solicitar la nacionalización del contenedor haciendo pago de los derechos e impuestos que correspondan.

Art. 52.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 29 de agosto de 2000.

José L. Gioja. — Ricardo A. Branda. — Carlos A. Verna. — Alberto M. Tell. — Augusto Alasino. — Osvaldo R. Sala. — Horacio A. Zalazar. — Angel F. Pardo. — José Genoud. — Omar M. Vaquir. — Emilio M. Cantarero. — Daniel Baum. — Remo J. Costanzo. — Hugo A. Sager. — Firma ilegible. — Tomás R. Pruyas. — Jorge J. Massat. — Ruggero Preto. — José F. Carbonell.

En disidencia:

Juan C. Altuna. — Leopoldo R. G. Moreau. — Alberto R. Maglietti. — Edgardo A. Gagliardi. — Alcides H. López. — Jorge R. Yoma. — Julio C. Humada.

Sr. Presidente (Genoud). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Señor presidente: aclaro que vamos a hacer un informe sobre el dictamen de comisión, como ha anunciado el señor secretario.

Tenemos en consideración un proyecto de ley en revisión, que contiene una extensa variedad de reglas, procedimientos, mecanismos y obligaciones tendientes a coartar las posibilidades de evadir el cumplimiento de las leyes tributarias y previsionales.

En cierto modo, el contenido del proyecto es un reconocimiento de la incapacidad del Estado para controlar la aplicación de las leyes tributarias y previsionales y una nueva carga sobre los particulares para que apliquen su tiempo y dinero para recaudar y controlar por cuenta del fisco, lo que se agrega a la ya farragosa tarea que vienen imponiendo desde hace tiempo los organismos de recaudación, particularmente a través de los regímenes de retención, percepción e información, los controladores fiscales y los aplicativos informáticos.

Además, muchas de las disposiciones vigentes y las del presente proyecto introducen distorsiones en las prácticas comerciales, limitaciones a la libertad de los individuos e intromisiones en su intimidad.

Pero parece que nos hemos acostumbrado a tener que aceptar estas situaciones en aras de una finalidad de orden superior, como lo es asegurar la equidad tributaria procurando que todos los responsables cumplan con sus obligaciones y, al mismo tiempo, proveer de los recursos genuinos necesarios para que el Estado pueda cumplir sus fines.

Sin embargo, los avances alcanzados hasta el presente son desproporcionadamente reducidos frente a las facultades otorgadas a los organismos de recaudación y al despliegue normativo desarrollado.

Es posible que debamos preguntarnos si toda esta parafernalia de normas y procedimientos en realidad no conduce a que se afinen todos los comportamientos de quienes evaden, de manera que eludiendo semejante red de obstáculos resultará muy improbable que sean detectados.

El proyecto reitera y amplía las disposiciones del decreto número 434, de necesidad y urgencia, del 30 de mayo de este año, y está

estructurado en nueve capítulos, con un total de 51 artículos en su parte dispositiva.

El capítulo I, conformado por los artículos 1º al 11, establece en primer término una limitación a las transacciones en dinero, cuyos artículos 1º a 3º reproducen el texto de los artículos 1º a 3º del decreto 434, obligando a que los pagos por montos superiores a diez mil pesos se realicen mediante los instrumentos que especifica el artículo 1º, sin cuyo requisito no podrán ser computados como deducciones, créditos fiscales u otros efectos tributarios.

Los artículos 8º al 11 están referidos a la creación de un nuevo instrumento de pago denominado "cheque cancelatorio", mencionado entre los requeridos por el artículo 1º, a ser instrumentado por el Banco Central, y su contenido reitera el texto de los artículos 4º al 7º del mencionado decreto 434.

El capítulo II, conformado por los artículos 12 y 13, está referido al sistema de medición de producción primaria, cuyo texto se corresponde con los artículos 12 y 13 del decreto 434.

En el capítulo III, compuesto por el artículo 14, se faculta al Poder Ejecutivo a fijar una comisión de hasta el 7 por mil sobre la recaudación por aportes personales destinados al régimen de capitalización y de las contribuciones patronales, que será ingresado por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y las aseguradoras de riesgos de trabajo para financiar los gastos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, originados por su intervención en el proceso de recaudación.

Seguidamente el capítulo IV, conformado por los artículos 15 a 31, instituye un nuevo régimen especial para la determinación y percepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema único de seguridad social para las pequeñas y medianas empresas constructoras, según un monto máximo de facturación anual a fijar por la reglamentación. El objeto alcanzado, según el artículo 18, son las construcciones de cualquier naturaleza, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y conservación realizados sobre inmueble ajeno así como las obras públicas sobre inmuebles de cualquier naturaleza.

Los responsables del ingreso de las obligaciones determinadas serán las empresas contratistas y, en el caso de existir, las subcontratistas, cada una con su propio personal.

El proyecto continúa con el capítulo V, que está integrado por los artículos 32 a 36, en cuyo

texto se ratifica la creación del sistema de identificación nacional tributaria y social, que había sido implementado por el decreto 812 del 13 de julio de 1998.

En el capítulo VI se introducen modificaciones al actual procedimiento para la exportación de cigarrillos y combustibles con el objeto de evitar la maniobra histórica de exportar tales productos, exentos de impuestos internos, para su posterior reingreso al país a través del contrabando.

El capítulo VII está conformado por el artículo 42, que introduce modificaciones a la ley del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, aprobado por el título III de la ley 23.966.

Debemos señalar que aquí se introducen modificaciones a la sanción de Diputados, donde en el caso del impuesto a los combustibles para la zona patagónica tenían previsto determinar un cupo o un volumen físico de combustibles para las estaciones de servicio y a partir de ahí ellas debían justificar la mayor venta de combustibles. Nosotros hemos cambiado esto en el dictamen de comisiones, habiéndose establecido un sistema de registro, en el que se deben anotar los transportadores, quienes venden o expenden. Además, se dispone una serie de puntos fijos de control. Es decir, hemos determinado que sea la AFIP quien vuelva a controlar y no que los particulares se controlen a sí mismos.

Finalmente, el capítulo IX, conformado por los artículos 49 a 51, está dedicado a otras disposiciones. Aquí, la comisión ha modificado lo que en la sanción de la Cámara de Diputados era el artículo 49, por el cual se derogaba el régimen especial de fiscalización establecido en el capítulo XIII de la ley 11.683, de procedimiento fiscal, conocido vulgarmente como "ley tapón" o más técnicamente como "régimen de bloqueo fiscal", que comprende a los impuestos que se recaudan bajo el régimen de la ley mencionada de procedimiento fiscal. Este régimen se implantó a principios de 1990 y sucintamente implica que la Administración Federal de Ingresos Públicos debe iniciar las inspecciones por el último ejercicio fiscal vencido, si son anuales, y por los últimos doce meses calendario vencidos en el caso de las liquidaciones mensuales. En el caso de no hallar diferencias, no se puede extender la verificación a períodos anteriores. En caso de hallar diferencias, la inspección se ex-

tenderá a los períodos fiscales anteriores no prescriptos, siguiendo los métodos que establece la ley de procedimientos.

Al momento de su instrumentación, este procedimiento se fundaba en la conveniencia de que, en virtud de la situación de inestabilidad de los años precedentes y el masivo cumplimiento irregular de los contribuyentes, se incitara a éstos, a partir de ese momento, a declarar correctamente sus obligaciones tributarias sin que ello implicara una presunción o revelación de las omisiones anteriores.

Con relación a la forma en que estaba redactada esta derogación, cabe observar que podrían haberse generado planteos administrativos y judiciales por parte de los contribuyentes que consideraron que a la fecha de entrada en vigencia de esta derogación ya tenían adquirido el derecho por los períodos fiscales no prescriptos a esa fecha. Por eso hemos eliminado este artículo en el dictamen de la comisión. Además, como el señor presidente sabe, hay una moratoria que está vigente; a partir de esta moratoria se podrían investigar los períodos hacia atrás de todos aquellos que se hubieran acogido, alterando la seguridad fiscal.

Vamos a votar una nueva contribución a la maraña normativa que, de tan extensa e intrincada, no puede ser abarcada por ningún profesional especializado pero que también complica a los funcionarios de los organismos de control y recaudación y, más ampliamente, a toda la organización administrativa involucrada, en la que buena parte de los esfuerzos deben dedicarse al montaje, manejo, supervisión, mantenimiento y actualización de los sistemas de control, y a procesar una catarata de información que la organización no está con capacidad de analizar y filtrar.

Ciertamente, el escepticismo sobre las posibilidades de la aplicación de la ley se ve reforzado por el hecho de que en cuestiones más simples los organismos de control no logran detectar el ingreso por la frontera de ganado portador del virus de la aftosa —si no encontramos las vacas, mire si vamos a encontrar a los evasores...— o los productos combustibles exentos que se mezclan con los gravados o la exportación de agua en lugar de nafta.

Pero como expresé al comienzo de mi exposición, al parecer nos hemos acostumbrado a tener que aceptar estas situaciones en aras de

una finalidad de orden superior, a la espera de que el rigor de la ley sea equiparado por la eficacia del aparato de control. En virtud de ello y no obstante los reparos formulados, nuestra bancada contribuirá a dar al gobierno los instrumentos que considera necesarios para avanzar en la lucha contra la evasión.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: este proyecto me lo había reclamado reiterada y personalmente el presidente de la Nación. Con su autorización previa, quiero explicar de alguna manera las relaciones que necesariamente, frente a estos temas importantes para el país, debimos ir llevando a cabo para sacarlo adelante.

Debo decir que desde hace bastante tiempo le advertía en nuestras conversaciones semanales que el bloqueo fiscal no era un tema pacífico cuando lo discutíamos en el bloque y, específicamente, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Hace muy pocos días, cuando el señor presidente estaba en Brasilia, me comuniqué para decirle que tanto en éste como en el tema de la emergencia económica teníamos dictámenes y que, de alguna manera, desde el Ministerio de Economía no se admitían desde hacía bastante tiempo las reformas que proponíamos y que eso demoraba la sanción del proyecto de ley.

De manera que frente a la urgencia y al reclamo que el señor presidente de la Nación nos estaba haciendo y que ese mismo día reiteraba, le dije: “El bloque acaba de resolver avanzar con su propio dictamen y la discusión la vamos a dar en el recinto”.

Debo decir que el señor presidente me preguntó si no había ninguna posibilidad de lograr un acuerdo para unificar los dictámenes presentados y poner a consideración sólo uno. Yo le acoté: “Señor presidente: hemos abandonado la posibilidad porque realmente frente a estos temas no logramos conciliar posiciones con el resto de los bloques”. Entonces, el bloque justicialista va a ir al recinto con su dictamen; que la Cámara de Diputados haga la segunda revisión y admita las modificaciones que proponemos o no.

Pero advertimos que cuando votamos el famoso “impuestazo” la Cámara de Diputados rechazó nuestras modificaciones y a posteriori el Poder Ejecutivo, vía resoluciones ministeriales

y de la AFIP, puso de nuevo en vigencia las modificaciones propuestas por nosotros y desechadas en su momento por la Cámara de Diputados.

Esto también vale específicamente para el caso del proyecto de ley de emergencia económica a cuya consideración seguramente nos vamos a abocar en unos minutos. Tuvimos el mismo diálogo y le dije que en cuatro o cinco puntos nosotros teníamos la más absoluta negativa del señor ministro de Economía y de los funcionarios con respecto a acceder a lo que veníamos peticionando en nuestro dictamen. En consecuencia, nuestra decisión también era en el sentido de avanzar con las propuestas que consideramos son las más convenientes y las que mejoran el proyecto de ley en revisión sobre emergencia económica.

También le dije que evidentemente nosotros, por las deserciones de algunos compañeros senadores, no teníamos mayoría como para poder suscribir el dictamen que permitiera el tratamiento del tema en el recinto. Asimismo, le solicite que tomando contacto con las autoridades del bloque de la Alianza estudiara la posibilidad de que, a través de la suscripción de dictamen, disidencias parciales o totales mediante, se desbloqueara su tratamiento.

Por eso puedo afirmar que este compromiso realizado por nuestro bloque cuando yo lo presidía hoy se está cumpliendo en todos sus términos.

Al margen de ello, a quienes se les ha solicitado el desafuero se nos ha planteado seriamente la posibilidad de abstenernos en esta votación.

Creemos que el compromiso político que hicimos para que esta norma sea aprobada debe ser más importante y poderoso que esta presentación pública que podríamos hacer solicitando que se nos autorice a abstenernos en esta votación.

Señor presidente: hemos conversado largamente si éste es el camino o no, porque tal vez sería un gesto con el cual los que de alguna manera estamos intentando ir a la Justicia de una buena vez para aclarar estos temas podríamos permitir que la aprobación de esta norma avance. Y frente a estos dos valores en juego el compromiso político de sancionar la ley y esta posibilidad que cada uno de nosotros podría tener de hacer su propia *mise en scène*, de abstenernos de votar la iniciativa, nos hemos resuelto por lo primero, por cumplir con el compromiso que oportunamente asumimos —y en los térmi-

nos en que lo hicimos—, que el presidente conoce y que me ha autorizado expresamente a decir públicamente, porque antes de hacerlo efectué las consultas telefónicas correspondientes.

Esto responde exclusivamente al espíritu de colaboración que hemos tenido de llevar adelante estas propuestas con las cuales no coincidimos, aunque tal vez tengan razón quienes administran el país al considerar que éste es el camino, al igual que antes, y por eso los hemos acompañado.

Para finalizar, agradezco al presidente de mi bloque que me haya permitido hacer esta manifestación y agregó que nuestro sector está cumpliendo estrictamente con el compromiso político que, en favor del país, hiciera con el presidente de la Nación.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: me parece oportuno destacar que el Capítulo VII del proyecto que estamos considerando y que seguramente aprobaremos dentro de pocos minutos, contiene una inteligente y posible manera de combatir un grave flagelo que existe en la Argentina, que es la evasión del llamado impuesto a la transferencia de combustibles, a través de las denominadas naftas ilegales o “truchas”.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del H. Senado, senador Ruggero Preto.

Sr. Carbonell. — En ocasión de discutirse en esta Cámara el paquete impositivo que la conducción económica del nuevo gobierno propuso a la Nación al comienzo de su gestión, y cuando vino acá en revisión la sanción de Diputados, advertimos que contenía una disposición que desde nuestra bancada objetamos y que, en los hechos, hubiera llevado a gravísimos perjuicios a variadas industrias vinculadas a la petroquímica en nuestro país, incluso a una industria floreciente e importante como es la industria aceitera, porque se estaba aplicando el impuesto a la transferencia de combustibles con la teórica previsión de su devolución en un plazo de 15 días a aquellos productos como las gasolinas naturales, las naftas vírgenes y el hexano, que son materia prima para la obtención de productos químicos variados.

En esa oportunidad habíamos advertido que, de aplicarse, eso tendría consecuencias gravísimas.

mas; votamos alternativas que luego en Diputados no fueron receptadas y, finalmente, vimos cómo el gobierno no pudo aplicar la norma, por que no existían los mecanismos técnicos para garantizar la devolución en los términos previstos por la ley de este impuesto a la transferencia de combustibles a lo que no estaba destinada a combustible.

La propuesta que contiene el capítulo VII del proyecto que estamos analizando tiene la flexibilidad, las previsiones y las exenciones naturales para no obstaculizar a industrias cuyos productos no se encuentran gravados ni está en el espíritu de la legislación impositiva hacerlo, y si perseguir y acotar las posibilidades de que en la Argentina se sigan produciendo o importando naftas que se encuentren exentas del impuesto a la transferencia de combustibles, que tiene una participación sustantiva en la torta del ingreso nacional y que tiene, por leyes de la Nación, destinos muy nobles —especificados—, los cuales deben cumplirse con toda la intención del término.

Se ha hablado de que la evasión impositiva en esta materia supera los 300 millones de dólares anuales. Y es naturalmente un objetivo del gobierno y de la oposición tenderle el cerco para evitar que esto siga ocurriendo. Se debe hacer de una manera inteligente y prudente, como se hace en el texto que estamos ahora proponiendo.

Las palabras tienden a poner de resalto que cuando en diciembre o febrero advertíamos que esa parte del paquete impositivo era inaplicable teníamos razón.

Sr. Presidente (Proto).— Tiene la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris.— Señor presidente: sin duda alguna éste es un tema de suma importancia. Quiero adelantar en nombre de mi bloque el voto favorable en general, no así en algunos aspectos en particular. Como es extenso mi discurso voy a pedir, después de breves consideraciones, la inserción del resto, teniendo en cuenta que hoy tenemos otros temas trascendentes para tratar.

En este aspecto quiero decir que este proyecto de ley nos llega en revisión desde la Honorable Cámara de Diputados y su propósito original fue implementar una serie de medidas para combatir la evasión tributaria y previsional. En este aspecto debo manifestar que en todos los casos en que tratamos temas simila-

res en oportunidades anteriores mi postura ha sido coherente en el sentido de que no he obstaculizado las políticas que demandan desde el Poder Ejecutivo Nacional relativas a la lucha contra la evasión, más allá de que muchas veces —incluyendo esta propuesta— no me encuentre plenamente convencido de la efectividad de las normas que se examinan.

Por esto discrepo con varios aspectos de este proyecto, pero insisto y reitero que lo voto favorablemente. Por ejemplo, el agregado del artículo 51 por el que se modifica la ley de transporte multimodal, a mi criterio, nada tiene que hacer en este proyecto de ley. Por eso propicio su derogación, dado que daña seriamente el comercio internacional y adquiere carácter confiscatorio para los operadores navieros y el uso de contenedores.

Las razones expuestas fundan mi voto positivo en general, como dije, y describen a grandes rasgos mis discrepancias con el texto en particular, que las ampliaré en la discusión pertinente. Son muchas las cosas que tendría que decir y llevaría mucho tiempo hacerlo; por eso voy a pedir que el resto de mi exposición sea insertada, si así lo creen los demás colegas.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Adelanto mi voto favorable en general a este proyecto de ley que nos llega en revisión desde la Honorable Cámara de Diputados cuyo propósito original fue implementar una serie de medidas para combatir la evasión tributaria y previsional.

El sentido de mi voto es, como lo he hecho en todos los proyectos de esta naturaleza, no obstaculizar las políticas que se demandan desde el Poder Ejecutivo nacional relativos a la lucha contra la evasión, mas allá de que muchas veces, que incluye esta propuesta, no me encuentre plenamente convencido de la efectividad de las normas que se examinan.

Asimismo, también anticipo mi desacuerdo con diversos artículos de esta norma, que no tienen relación con esta materia y se refieren específicamente a otros temas, modificando otras leyes de manera hasta inconsulta y que fueran añadidos en el debate de la Cámara iniciadora.

Desde mi incorporación a este honorable cuerpo hemos venido sancionando de modo prácticamente constante, vía retoques a la ley 11.683 de procedimiento fiscal, medidas cuya finalidad ha sido reducir la evasión. Cada nueva administración fiscal ha propuesto y se le han aprobado normas que parecían las mas eficaces en este aspecto.

Sin embargo, los años transcurren y a pesar de haberse otorgado facultades que yo calificaría como excepcionales por su naturaleza represiva al organismo recaudador, como la traba de embargos preventivos con simples certificaciones de deuda, nos hallamos siempre frente al mismo problema.

Tampoco resultan conducentes políticas que por un lado facultan a la Dirección General Impositiva a emplear todo tipo de medidas punitivas, pero a la vez, simultáneamente se la limita en medios humanos y económicos, de modo que en los hechos se neutralizan.

Valga como ejemplo el reciente retiro voluntario del personal del organismo, implementado por la anterior gestión, que permitió, a costos elevadísimos, que funcionarios de muchos años y altamente capacitados, se alejaran de la DGI.

He leído recientemente que como carece de las partidas presupuestarias, no hay fondos para viáticos de los inspectores y por tanto, su labor queda limitada a la zona de la agencia o delegación donde están asignados, porque no pueden trasladarse a otras localidades.

Por eso, tal vez hubiera sido esta la oportunidad de ir más profundamente al examen de las causas que generan el incumplimiento de las obligaciones fiscales tanto por parte de sectores empresarios sean éstos de la producción primaria e industrial, (o) bien del área del comercio o de los servicios, o bien la de amplios sectores de la comunidad que realizan sus actividades prácticamente al margen de toda norma tributaria, conformando todo ese universo que se denomina como "la economía informal". Si acaso, para los primeros no es otra cosa que la imposibilidad de afrontar debidamente un sistema impositivo que genera una presión fiscal insostenible para ese sector y particularmente, en la magnitud de las denominadas pequeñas y medianas empresas, de manera que la evasión se convierte en un modo insalvable de supervivencia, estamos equivocando el camino.

En cuanto a la economía informal, que comprende mayoritariamente a núcleos marginales, se ha creado la fantasía de su contralor a través del denominado monotributo, transformando a la Dirección General Impositiva, como la calificara, hace, ya algún tiempo, un secretario de Ingresos Públicos en un gigantesco buzón donde cerca o más de un millón de "contribuyentes", aportan por todo concepto el uno por mil del PBI o, en términos fiscales, sólo el 1,5 % de la recaudación.

He insistido, y por ello no voy a dejar pasar esta oportunidad de reiterar mi postura, sobre la conveniencia de buscar la colaboración de la comunidad toda en materia de cumplimiento de la obligación fiscal.

En iniciativas legislativas y también en debates he señalado la conveniencia de discriminar el impuesto al valor agregado, según su destino, ya que como todos sabemos, por las normas de distribu-

ción, casi la cuarta parte, es decir el 4,85 %, tiene por destino la seguridad social. Si toda factura o boleta o ticket a consumidor final discriminara ese porcentual, el jubilado o pensionado estaría en condiciones de controlar si se esta cumpliendo con el aporte que lo tiene como beneficiario.

Dado que el sistema nacional tiene mas de 3.150.000 beneficiarios directos a los que hay que agregar los 160.000 pasivos de las cajas provinciales transferidas, cabría contar con más de 3.300.000 personas interesadas en el cumplimiento de la facturación.

Prácticamente todo el espectro de actividades comerciales y de servicios, quedaría sujeto a una suerte de control o fiscalización por parte de todos los beneficiarios previsionales. En razón de que la correcta facturación del IVA se enlaza a su vez con el resultado, es decir, con las ganancias y a su vez tiene igual base con los ingresos brutos provinciales, cabría esperar una sustancial mejora en la recaudación, de donde se derivarían a su vez, el incremento de los beneficios o la cancelación de antiguas deudas.

Pero la mira oficial en esta materia es diferente y así ahora, a menos de dos meses de recibido este proyecto, se apresura su sanción aun cuando la posibilidad de su implementación real requiera todavía tiempos muchos más extensos y tal vez, como otras iniciativas, terminen siendo inaplicables.

Un examen de las normas propuestas a consideración de este cuerpo muestra en primer término sensibles diferencias con la remitida en su oportunidad por el Poder Ejecutivo nacional, cuyo análisis y crítica, en forma general, efectuare.

El capítulo I, en sus 11 artículos propone una limitación a las transacciones en dinero efectivo, estableciendo un tope de \$ 10.000, si ellas no fueran efectuadas por los medios que puntualiza el artículo 1º, es decir, depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias de esta índole, cheques, tarjetas de crédito y otros procedimientos cuya autorización podrá efectuar el Poder Ejecutivo.

Su propósito es no sólo contribuir a combatir la evasión fiscal sino también limitar la posibilidad de "lavado" de dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas, dice el mensaje del Ejecutivo. Añade que también alentará el uso de instrumentos bancarios.

Aun cuando la idea que anima este artículo parece apropiada, la penalidad de no surtir efecto entre las partes ni frente a terceros entraña graves proyecciones sobre la actividad económica que una vez más se verá entorpecida por estas medidas.

Creo que esta extensión a los individuos económicos puede ser simplemente negativa, ya que como los hechos lo demuestran operan en el país centenares de sociedades extranjeras, constituidas *off shore*, por sumas millonarias.

El capítulo II se refiere al establecimiento de un sistema de medición de producción primaria, que

deberán llevar las plantas industriales de faenamiento de hacienda y de molienda de trigo.

Cabría recordar que la desaparición de las juntas nacionales de granos y de carnes derivadas del decreto de desregulación económica eliminó en la práctica todo el contralor que existía sobre la producción e industrialización de granos y carnes y permitió las gigantescas evasiones que se han denunciado en estos rubros.

Dado que no están explícitos cuáles y de qué modo funcionarían estos sistemas electrónicos de medición y control, abrimos una carta de crédito sobre el particular a la espera de las medidas concretas.

Comparto la fijación de una comisión a favor de la AFIP relativa a reembolsar el costo de recaudación de los aportes personales destinados al régimen de capitalización de la ley 24.241 y la ratificación del decreto 863/98.

Pero no dejo de señalar la diferencia con la idea original del gobierno nacional de delegar en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones funciones de recaudación y fiscalización de los aportes al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS). En su momento, requerí de estas empresas acciones positivas en este sentido, en lugar de su actitud pasiva de limitarse a recibir los fondos de los aportantes y su inversión, en tanto una evasión del orden de los \$ 6.000 millones perjudicaba al Estado nacional y por ende a los actuales beneficiarios del sistema previsional.

Por el capítulo IV se establece un régimen especial para la determinación y percepción de los aportes y contribuciones para el citado Sistema Único de la Seguridad Social para las pequeñas y medianas empresas constructoras.

Entiendo que estas normas que abarcan 17 artículos más un anexo han sido ya consensuadas con los sectores de la construcción involucradas y podrían ser positivos para que esta actividad, evaluados como una de las que opera marginalmente en los más altos porcentuales, pueda reconducir sus negocios dentro de un marco de obligaciones fiscales.

En cuanto al capítulo V, por el cual esencialmente se ratifica la creación del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, o SINTYS, lleva a nivel de ley una proficua labor iniciada en la anterior gestión y que ya ha dado resultados positivos en materia de contralor de beneficios previsionales mal acordados.

Como observación es de desear que esta nueva estructura sea dotada de los equipos electrónicos adecuados y no se convierta en un organismo burocrático que termine autoanulándose.

El capítulo VI referido a la exportación de cigarrillos y combustibles procura evitar la reintroducción en nuestro país de los bienes exportados y con ello exentos de los impuestos internos.

Particularmente grave para mi provincia, la norma es apoyada por los establecimientos elaboradores y por tanto contará con mi aprobación.

La Cámara de Diputados añadió los capítulos VII y VIII referidos, el primero a una modificación de la ley 23.966, en su título III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural y, el segundo, a normas contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y su modificatoria, 24.013.

Por cierto que la difusión de hechos que habrían comportado una defraudación fiscal de relevancia en haberse derivado al consumo como combustibles a productos que no abonaban los impuestos internos por estar destinados supuestamente a ser usados como materia prima por las industrias químicas y petroquímicas ha generado la sanción de esta norma.

Tiene el propósito de evitar la perpetración de nuevas maniobras y es de esperar que el régimen propuesto, con las modificaciones introducidas por las comisiones, alcancen el objetivo perseguido.

En materia laboral, las normas tendientes a compelir a los empleadores al cumplimiento de sus obligaciones a través de multas a favor del trabajador, sin perjuicio de reconocerlas como bienintencionadas pueden ser contraproducentes en momentos en que el desempleo constituye uno de los problemas más cruciales que debe afrontar la sociedad argentina.

Se puede así favorecer por esta vía la precarización del trabajo, limitándolo a contratos de tiempo transitorio, exentos de estos aportes y retenciones.

Dentro del capítulo IX, apoyo el dictamen de las comisiones por el cual se elimina el artículo 49 por el cual se derogaba el régimen especial de fiscalización previsto en el capítulo XIII de la ley 11.683 conocido como el régimen de bloqueo fiscal. La proposición de esta derogación motivó fuertes rechazos del área económica, considerándose que afectaba derechos adquiridos y por tanto era susceptible de ser atacado como inconstitucional.

El sistema de bloqueo ha demostrado ser positivo desde su sanción por la ley 23.905 del 18 de febrero de 1991 y su decreto 629/92 y por ello considero apropiado su mantenimiento en vigencia.

Entiendo asimismo que el agregado por el artículo 52 por el que se modifica la ley de transporte multimodal nada tiene que hacer en esta ley.

Propicio su derogación dado que daña seriamente el comercio internacional y adquiere carácter confiscatorio para los operadores navieros y el uso de contenedores.

Las razones expuestas fundan mi voto positivo en general, y describen a grandes rasgos mis discrepancias en cuanto al texto en particular, que serán ampliadas en la discusión pertinente.

Sr. Presidente (Preto).— Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa.— Señor presidente: en realidad en las finanzas públicas el problema más grave es la evasión y no hemos logrado combatirla ade-

cuadramente, aunque haya otros problemas. De manera que voy a votar afirmativamente este proyecto.

En particular haré algunas observaciones, pero deseo señalar que en el Capítulo II se establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación será una de las autoridades de aplicación, por lo que este tema debería haber sido analizado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. Confieso que no lo advertí a tiempo, pero en ese capítulo hay algunas disposiciones en las que oportunamente pediré la eliminación de un párrafo.

También debo señalar que, si bien figura la Comisión de Economía en el proyecto, formalmente no entró el dictamen. Igualmente, hay señores senadores que pertenecen a otras comisiones y a la de Economía, de manera que reúne las firmas necesarias.

Señor presidente: por ahora, no voy a expresar nada más. En el tratamiento en particular, haré algunas observaciones.

Sr. Presidente (Preto).— Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero.— Señor presidente: voy a formular unas muy breves consideraciones acerca de la votación de este proyecto de ley, que valen también para el proyecto referido a la emergencia económica, que se pondrá en consideración con posterioridad. Quiero volcar algunas reflexiones que he compartido con varios señores senadores y que hoy transmití a los presidentes de bloque en la reunión de labor parlamentaria.

Pero antes quiero hacer una aclaración fundamental, porque no deseo herir en lo personal a ningún colega, ni que se me atribuya incriminación en el trámite que está en marcha sobre sobornos en este Senado de la Nación.

Hago esta aclaración, además, porque desde hace ya unos cuantos días tengo la tensión entre estar a disposición, como lo han manifestado y hecho todos los señores senadores, de la Justicia y de todos los resortes que puedan colaborar para esclarecer el caso y, al mismo tiempo, de cumplir la tarea de senador nacional y bregar por el funcionamiento del cuerpo. Digo esto porque estoy convencido de que tenemos que sesionar, sancionar leyes y dar trámite a estos dos proyectos y a muchos más, no sólo porque lo pide el Poder Ejecutivo sino porque tenemos que cumplir con nuestra responsabi-

dad de legisladores en todos los temas que tenemos pendientes.

Pero les confieso que a partir del viernes, cuando recibimos en este Congreso una solicitud de desafuero de ocho señores senadores, me preocupa la situación de funcionamiento del cuerpo en cuanto a la sanción de las leyes con el voto de los señores senadores requeridos hoy por la Justicia en términos de desafuero. Y me preocupa fundamentalmente porque tengo muy claro que en este tipo de situaciones hay dos planos de funcionamiento. Uno es el plano jurídico institucional, que tiene una enorme valía e importancia, dado que es el soporte a partir del cual se construye la convivencia y se genera el estado de derecho. El otro es el llamado plano de la legitimación de los actos políticos que llevan a cabo las distintas instancias de la organización estatal.

Esos actos de legitimación se construyen en el día a día, no sólo con la conducta de los políticos sino también con la opinión de la gente, genéricamente llamada opinión pública.

Con todo respeto, me animo a predecir una dificultad; simplemente es una preocupación, pero no es menos que la predicción de una posible dificultad futura, que me siento en la necesidad de transmitir a mis colegas. Creo que estas leyes pueden ser cuestionadas en el futuro si cuentan con el voto, en la sesión de hoy, de los señores senadores cuyo desafuero ha sido requerido por un juez federal de la Nación.

Lo creo porque puede ocurrir —Dios no lo quiera— que algunos de esos señores senadores resulten inculpatos y condenados por hechos sucedidos con anterioridad, que nosotros hoy...

Sr. Rodríguez Saá.— ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Preto).— Le solicita una interrupción el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Del Piero.— La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Preto).— Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: el hecho de que algunos de nosotros sostengamos que corresponde tratar en primer término la cuestión de los desafueros no significa, de manera alguna, aceptar la posibilidad de que una ley aprobada por este cuerpo pueda ser impugnada porque los señores senadores, el día de mañana, podrían, habrían o lo que fuere...

Aquí, en la Argentina, rige la Constitución Nacional y esa norma determina que el cuerpo, en este momento, está bien constituido.

Sr. Menem.— ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Preto).— Le solicita una interrupción el señor senador por La Rioja.

Sr. Del Piero.— La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Preto).— Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem.— Señor presidente: quiero preguntarle al señor senador Del Piero si tiene conocimiento de que alguna vez, en la historia institucional del país, ante un mero pedido de desafuero algún senador o algún diputado haya sido privado de votar una ley antes del tratamiento del pedido de desafuero, o si tiene conocimiento de algún planteo, ante los Tribunales, de ilegalidad de una ley votada por un legislador ante un mero pedido de desafuero.

Querría que el señor senador me informase si tiene algún antecedente sobre el particular. Y debo advertirle que han habido muchísimos legisladores que tuvieron pedidos de desafuero y siguieron votando leyes.

Sr. Presidente (Preto).— Voy a solicitar a los señores senadores que se ciñan estrictamente al tratamiento del tema que estamos considerando.

Continúa en uso de la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero.— Señor presidente: en oportunidad de votar el plan de labor, justamente en la línea de trabajo sugerida por algunos presidentes de bloque, entendimos que esta situación se solucionaba con la propuesta de tratar en primer término la cuestión de los desafueros y, con posterioridad, los proyectos acordados.

De todos modos, voy a redondear mi exposición porque entiendo que es suficiente con formular la advertencia que hice y que parte del sentido común.

Le contesto al señor senador Menem que conozco esos antecedentes, pero también le recuerdo que nunca la Nación o la República han estado en este nivel de crisis y conflicto político en un ámbito como es el Senado de la Nación. En consecuencia, entiendo que debemos redoblar los esfuerzos a fin de que esos dos planos que he planteado, y que entiendo que todos los senadores comparten, que hacen a la realidad

jurídico-institucional y a la construcción de la opinión pública y la legitimidad...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Del Piero.— Señor presidente: ruego no ser interrumpido en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Preto).— Ruego a los señores senadores que vuelvan al tratamiento del proyecto de ley que nos ocupa.

Sr. Del Piero.— No tengo nada más que decir, señor presidente.

Sr. Presidente (Preto).— Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Maya.— ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Preto).— Señor senador Altuna, ¿le permite una interrupción?

Sr. Altuna.— Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Preto).— Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya.— Señor presidente: no voy a entrar en la consideración de fondo de la ley porque, durante el tratamiento en particular, voy a hacer una propuesta.

Pero no puedo dejar pasar las expresiones vertidas en este recinto por el senador proponente, las cuales no creo que sean consecuencia de una decisión autónoma y personal sino que obedecen a una estrategia singular y partidaria del Frepaso, partido al que pertenece y cuya conducción política ejerce el vicepresidente de la Nación, que es quien marca la línea. Reitero: es quien viene marcando precisamente esta línea de descrédito y debilitamiento institucional.

Esa estrategia tiene como objetivo “surfear” por encima de la ola de ira que tiene la gente como consecuencia de las insatisfacciones sociales y, sobre esta base, generar rédito político como resultado de esas perversas y mezquinas especulaciones que se tejen en la cuestión política.

Este no es un planteo que hago hoy. Lamento mucho que este cuerpo no se haya dado cuenta de que, a partir del 10 de diciembre pasado, hay un programa de ejecución política perfectamente vertebrado sobre este escenario, promovido por ese partido, el Frepaso, que es un partido mediático. Es un subproducto mediático, que no tiene objetivo político ni programa ni pro-

puesta. Pero, en definitiva, tiene este objetivo: enancarse en situaciones políticas con el propósito de sacar rédito a partir del descrédito del conjunto de los demás.

Plantear sanciones previas implica el derecho a la violación del sistema, minar sus verdaderos cimientos. Este planteo es perverso. Y esto es lo que viene haciendo con las instituciones la propuesta del Frepaso, en cabeza de su propio jefe, que es el vicepresidente de la Nación, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo.

Reflexiono, señor presidente, siguiendo la línea argumental que ha planteado el senador preopinante y tomando como posible la hipótesis de que hubiesen existido sobornos en este cuerpo, y avanzo aún más: si ocurrieron ese tipo de hechos, creo que es prácticamente imposible que el propio señor Álvarez no sepa de tales circunstancias, porque las negociaciones llevadas adelante por el ministro de Trabajo se concretaron en su propio despacho. O sea que estaríamos ante una actitud cínica e hipócrita de utilización mediática de una cuestión desgraciada y aún sin resolver por la Justicia.

Más aún, señor presidente: creo que cuando votemos el desafuero voy a peticionar expresamente que se conceda el desafuero también del presidente de este cuerpo, que es el vicepresidente de la Nación, licenciado Carlos Álvarez, porque él va a tener que ser objeto de indagatoria. El sabe mucho y tiene mucho que explicar; entre otras cosas, por qué no tomó medidas cuando Cafiero lo increpó con firmeza planteándole la preocupación que tenía. El vicepresidente le dijo: "Yo, en este tema, no me meto. Es un tema pesado".

Comportamiento similar de conocimiento y encubrimiento eventual tuvo también posteriormente el señor Álvarez cuando le tomó juramento en forma vergonzante a un ministro del Poder Ejecutivo, como aconteció con el ministro Flamarique.

De modo que rechazo ese planteo oportunista y mediático, que sé que no es autónomo sino que es el eco de instrucciones partidarias recibidas, y que se ha concretado en esta Cámara. Se inscribe en esa estrategia de "surfear" sobre la ola del oportunismo para perjudicar a las instituciones.

No quiero en lo más mínimo que se debilite la acción de la Justicia, pero no voy a consentir pacíficamente que se obstruya su accionar ni

que se apliquen sanciones preventivas sobre ninguno de los integrantes de este cuerpo, sea cual fuere el partido al cual perteneciera.

Como cualquier ciudadano común, tenemos que estar a disposición de la Justicia y, como cualquier ciudadano común, no podemos admitir sanciones previas, mucho menos direccionadas por operativos difamatorios de gente que hasta ayer se hizo la distraída, como el vicepresidente de la Nación, Carlos Álvarez, que está en una actitud, si no de conocimiento de un eventual soborno, de otra mucho más grave, vinculada con la complicidad de esmerilar institucionalmente la figura del presidente de la República, situación que nosotros no vamos a consentir pacíficamente.

Por eso repudio esas actitudes oportunistas que desmerecen el comportamiento político y constituyen actitudes desleales, ocasionales, mediáticas, arribistas y superficiales. Se montan en la desgracia que vive la sociedad para trepar sobre el decoro de los demás y, así, progresar. ¡En política se progresa con trabajo, con esfuerzo, luchando para que haya mejores condiciones para la gente, pero no generando cortinas de humo y campañas mediáticas desde el gobierno!

El vicepresidente de la Nación sigue con la misma "plancha" que instrumentó durante la campaña presidencial. Ahora tiene que gobernar. No tiene que conducir al país al caos, sobre la base de que el único hecho que genera es el descrédito de los demás. Por ello repudio profundamente esas palabras.

Ayer, cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales muchos señalaron la eventualidad de plantear una cuestión de privilegio contra este senador que acaba de hablar, yo me opuse, señor presidente, porque creo que no hay que individualizar al autor material de la operación sino al autor intelectual del descrédito y del esmerilamiento de las instituciones, que no es otro que quien ha presidido esta Cámara.

Digo esto formalmente, haciéndome responsable de las circunstancias. Sé que al momento de elaborar fundamentaciones probatorias sobre estas cuestiones van a sobrar los antecedentes que se vienen registrando aquí desde el 10 de diciembre pasado, que demuestran acabadamente un comportamiento diabólico, dañino y perverso, destinado a perjudicar al cuerpo.

¡Que avance la Justicia como queremos todos, pero que dejen de perjudicar a la sociedad

política en una complicidad mediática que realmente es deplorable para todos nosotros! (*Aplausos*)

Sr. Presidente (Preto). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero...

74

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Meneghini. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Preto). – Tiene la palabra el señor senador Meneghini para una cuestión de privilegio.

Sr. Meneghini. – Señor presidente: vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el senador Del Piero, quien ha solicitado la abstención del suscripto y de siete colegas, cuyo desafuero ha sido requerido por el juez. De hecho, esto implica una suspensión en mis funciones legislativas.

Sr. Gioja. – ¿No se lo puede hacer venir a Del Piero?

Sr. Meneghini. – Se funda en un expediente que ni siquiera conozco y que ni he querido ver, porque estoy plenamente convencido de mi inocencia, de mi falta de participación absoluta en esos hechos.

Pero el senador por la Ciudad de Buenos Aires, con sus dichos, me ha juzgado, nos ha juzgado, nos ha condenado, violando los principios de inocencia y del debido proceso legal y a la Constitución, porque éstos son principios insertos en la Constitución que en su oportunidad juró respetar en esa mesa.

Señor presidente: no voy a permitir especulaciones espurias con mi honra y mi decencia.

Por ello, pido que esta cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales a efectos de su análisis correspondiente.

Sr. Presidente (Preto). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

75

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Preto). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: me parece que todos tenemos la sensación, a esta altura, de que éste es el debate que no debíamos dar esta tarde.

Pero también tengo clara conciencia de que el silencio podría significar avalar posiciones que se han manifestado en este cuerpo y que no estoy dispuesto, justamente, a avalar con ese silencio.

Este tema se planteó ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Fue una cuestión y una preocupación planteada por el señor senador Ortega acerca de si debía participar o no en esta sesión. Lo hizo con toda sinceridad y de absoluta buena fe. Y también de absoluta buena fe le respondimos cuál era la posición que sustentábamos y que la quiero hacer pública esta tarde porque la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de ayer fue secreta.

Creo que en toda esta cuestión, en la cual se encuentra directamente involucrado el Senado de la Nación a partir de los pedidos de desafuero, que nos producen angustia institucional como cuerpo, no debe perderse desde ningún punto de vista el sentido de actuar con responsabilidad institucional, esa responsabilidad institucional que implica un compromiso sin límites con la verdad. Ese compromiso con la verdad, que será a cualquier costo, no puede significar desde ningún punto de vista que se esgriman posiciones que conlleven a apartarse de la Constitución y de la ley.

Comprendo al señor senador Meneghini cuando recién planteó la cuestión de privilegio. Somos senadores de la Constitución y senadores para cumplir la ley. Lo dijimos ayer en la comisión y lo repetimos esta tarde: cualquiera de los senadores que está sentado aquí ejerce plenamente sus funciones hasta tanto la Cámara no adopte una posición en contra. Y que yo sepa, la Cámara no ha adoptado todavía ninguna decisión que implique privar de las inmunidades a ningún senador ni, incluso, a aquellos sobre los cuales pesa un pedido de desafuero.

No actuar de esta forma significa hacerlo irresponsablemente y sumar factores de confusión a lo que ya de por sí causa estrépito en nuestra Nación.

Pero también quiero, además de sentar esta posición y apelando a que volvamos a la discusión de fondo de lo que hoy nos debe ocupar –que es el tratamiento del tema de la ley antievasión–, que no se busque de ninguna manera causar confusión en las posiciones políticas que sustentamos como Alianza.

La Alianza está constituida principalmente por dos partidos. Esos dos partidos tienen coin-

cidencia en un objetivo que es el que han planteado el presidente y el vicepresidente de la República: la búsqueda de la verdad. Más allá de eso...

Sr. Maya. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Molinari Romero. — ...nada. Más allá de eso, ninguna utilización de ningún tipo que se pretenda hacer cuenta con el aval de los senadores que integramos esta bancada.

Sr. Presidente (Preto). — Señor senador: le solicitan una interrupción, ¿la concede?

Sr. Molinari Romero. — Voy a culminar, señor presidente. Por lo tanto, no voy a conceder ninguna interrupción.

Quiero que quede en claro perfectamente cuál es nuestra posición. Todos los señores senadores gozan del absoluto respeto de sus pares, mientras no exista ninguna resolución en contra.

Sr. Presidente (Preto). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Menem. — Señor presidente...

Sr. Presidente (Preto). — Sí, señor senador.

Sr. Menem. — Tengo entendido que el señor senador se va a referir al tema de fondo que estamos tratando: la ley antievasión.

Sr. Altuna. — Sí.

Sr. Menem. — Entonces, quiero pedir autorización para referirme por dos minutos a este tema que acaba de plantear el senador Molinari Romero.

Sr. Presidente (Preto). — Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Adhiero en un todo a lo que acaba de manifestar el señor senador por Córdoba. Pero planteo el tema a un nivel de mayor gravedad todavía, porque esta cuestión no la ha planteado sólo el señor senador por la Capital Federal. La ha planteado el propio vicepresidente de la Nación.

Según un cable de la agencia DyN del día de hoy, el vicepresidente de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo, o sea en ejercicio de la Presidencia, dijo que mientras el Senado no resuelva los pedidos de desafuero contra varios legisladores no puede votar ninguna ley.

Es decir, el titular actual del Poder Ejecutivo está diciendo que este Senado no puede votar ninguna ley mientras no resuelva los pedidos de desafuero.

Esta situación es de extrema gravedad. Se está caminando al borde de la ruptura institucional por parte de quien ejerce uno de los poderes del Estado...

Sr. Maya. — Se quiere quedar...

Sr. Menem. — Más aún: hay una amenaza, porque dice que de no aprobarse los desafueros, la firma de los decretos de necesidad y urgencia no pasaría de esta semana. Nos amenaza: "Si no resuelven los desafueros, voy a sacar por decreto las leyes que tiene pendientes el Senado".

Dice que con senadores sujetos a pedidos de desafuero no resueltos no se puede votar ninguna ley. Además, avanza en atribuciones que son de este cuerpo cuando dice: "La forma de mostrar que no hay protección ni privilegio es votar el desafuero". ¡Nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer!

Vuelve a insistir que con senadores que están sujetos a pedidos de desafuero no se puede votar ninguna ley.

Esto es gravísimo porque es el presidente de este cuerpo, que ahora está a cargo del Poder Ejecutivo, el que está poniendo en duda o cuestionando la sanción de leyes por la Cámara de Senadores.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado de la Nación, senador José Genoud.

Sr. Menem. — Además, quiero señalar la falta de consecuencia. Aquí se habla de purificar la política, de cambiar prácticas políticas. En este caso concreto, yo lamento que se haya ido el senador Del Piero —él habla y después se va— porque le quería decir que le hiciera recordar al jefe de su partido cuál ha sido su conducta respecto de estas mismas cuestiones planteadas.

Mientras era diputado nacional, el señor Carlos Alvarez tuvo varios pedidos de desafuero. Uno de ellos fue por una querrela que le entablara el entonces presidente Carlos Menem por calumnias e injurias, en la cual el juez federal de San Isidro, doctor Marquevich, pidió su desafuero. Eso fue en 1994. Dijo entonces el juez: "Solicitar el desafuero del diputado nacional Carlos Alberto Alvarez, debiendo librarse el correspondiente oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (artículo 189 del Código Procesal Penal de la Nación)".

Desde 1994 el juez federal reiteró el pedido de desafuero a la Cámara de Diputados por lo

menos siete veces. Nunca el hoy presidente de este cuerpo dijo que se iba a someter al juicio. Ignoró olímpicamente la petición del juez federal. Más aún: siguió votando las leyes. No tengo conocimiento de que desde ese entonces haya dejado de votar una ley por aquella situación.

Entonces, ¿con qué autoridad puede venir a decir que este cuerpo no puede votar ninguna ley por parte de los señores senadores a quienes se ha pedido el desafuero porque no tendrá valor?

Por eso creo que no se puede atacar así. El día que planteé una cuestión de privilegio dije que ésta era una embestida contra el Senado y que se estaba tratando de desprestigiar al cuerpo. Los hechos que han ocurrido con posterioridad y esta misma actitud —ante un mero pedido de desafuero de un juez, quiere impedirle a un senador ejercer su mandato— creo que es un atentado, una violación de la Constitución Nacional. Por eso, repudio totalmente esa posición, señor presidente.

No voy a plantear cuestiones de privilegio porque no me afecta a mí personalmente, pero sí me afecta como integrante de este cuerpo. Y adhiero en un todo a la cuestión de privilegio planteada por el señor senador Meneghini y a las expresiones que han vertido los otros señores senadores sobre este mismo tema.

En definitiva, señor presidente, creo que los señores senadores sobre los cuales se ha pedido el desafuero tienen todas las facultades para participar de esta sesión y para votar todas las leyes hasta tanto el cuerpo resuelva lo contrario.

Sr. Presidente (Genoud).— Continúa en uso de la palabra el senador Altuna, salvo que conceda una nueva interrupción, en este caso al senador Branda.

Sr. Altuna. — La verdad es que todavía no he comenzado a hacer uso de la palabra, pero le concedo la interrupción.

Sr. Presidente (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor presidente: como he sido aludido, hago expresa reserva para fundamentar a posteriori una cuestión de privilegio que habré de plantear. Sé que ahora este proyecto de ley que estamos tratando es importante para todos los argentinos y para la Nación y no quiero demorarlo.

EVASION TRIBUTARIA Y PREVISIONAL (Continuación)

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente, señores senadores: no se me escapa que estamos tratando un proyecto de ley, pero debo decir que tengo la convicción de que lo que hoy apruebe esta Cámara será la verdad jurídica de este Honorable Senado de la Nación.

Por lo tanto, quiero referirme específicamente a esta ley que, por cierto, en enero de este año ha reclamado con vehemencia el Poder Ejecutivo nacional. Es obvio que digamos que tratar una ley antievasión es dar al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para combatir este flagelo que soporta la República, que no es nuevo por cierto y que tiene tanta antigüedad como la Nación misma.

Hemos escuchado con mucha atención los fundamentos vertidos por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre los distintos capítulos de este proyecto de ley que viene en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.

En general, mi bloque está de acuerdo, pero tenemos algunas diferencias que queremos puntualizar debidamente en la consideración en particular. Desde ya anticipo que hay dos aspectos fundamentales que queremos debatir con responsabilidad. Uno de ellos, aunque parezca paradójico, afecta a mi región: la Patagonia. Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles. Digo paradójicamente porque he sido uno de los legisladores que discutió este tema en forma larga y tendida antes de que asumiera el actual ministro de Economía. Me refiero a la cuestión de no quitar la exención del impuesto a la transferencia de combustibles en el ámbito de la Patagonia.

Al respecto, hemos hablado mucho con los colegas José María Sáez, Osvaldo Sala y Eduardo Arnold. Todos coincidimos en que algo debe hacerse. Se trata de un tema importante que no sólo hace al desarrollo de la economía de nuestra región sino también al aspecto social, dado que en la Patagonia se necesitan acometer grandes distancias para trasladarse de un lugar a otro. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa fundamentalmente.

Voy a disentir con el dictamen de la mayoría en este aspecto. Salvo alguna excepción respetable, nuestro bloque considera que todos los puestos de control, todas las medidas, todos los registros de control previstos en el dictamen de mayoría —que hemos firmado en disidencia— no serán en manera alguna eficientes para terminar con el contrabando. Que el Estado termine eliminando esta exención, en última instancia, podría constituir un bumerán. Sé que esto nos perjudicaría notablemente. Ninguno de nosotros lo quiere. Creo que esto no será conveniente para los intereses de la Patagonia.

Me parece bien que el Poder Ejecutivo haya dispuesto en su proyecto cuantificar en volúmenes las cantidades que quedarán libres del impuesto a la transferencia a los combustibles en la Patagonia. Creo que está bien, porque en todas las regiones que hoy están comprendidas en la exención se va a cuotificar el expendio de los combustibles, sobre la base de parámetros muy rigurosos. Si alguna estación de servicio necesita una cuota mayor que el volumen acordado, podrá acceder a ella, dado que el proyecto establece que la norma será revisable cada seis meses, de oficio o a pedido de parte interesada. Asimismo, el demandante deberá pagar todo excedente de ese volumen acordado con el impuesto a la transferencia a los combustibles. También rige la obligación del Estado de que a los diez días debe reintegrar ese importe.

Creo que esto es sano. Los patagónicos no queremos ser otra vez objeto de las especulaciones de terceros que, aprovechando esta exención, hacen el gran negocio del contrabando.

Recuerdo cuando se instaló en nuestra región, hace ya muchísimos años —en el 57 o en el 58—, el tema del famoso paralelo 42. Fueron muchos pícaros los que aprovecharon esas ventajas. Pero jamás ninguno de los pobladores de la Patagonia se encontró en una situación delictiva de esas características.

Por lo tanto, creo que con este dispositivo —que es muy simple— vamos a lograr que la Patagonia siga manteniendo la exención, pero en función de las verdaderas necesidades de la población de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Río Negro y Tierra del Fuego. En definitiva, esto es lo que nos debe preocupar: que los verdaderos interesados sigamos gozando de la exención en este impuesto a la transferencia de combustibles. Este es un aspecto a tener en cuenta, señores legisladores.

Tenemos otro punto de vista con respecto a la eliminación del artículo 49, que sostenía el Poder Ejecutivo en su mensaje de elevación y que hizo suyo también la Cámara de Diputados. Estamos hablando, nada más ni nada menos, que de lo que dimos en llamar “el bloqueo fiscal”. Nosotros queremos terminar con esta situación del bloqueo fiscal porque la AFIP sostiene que, en la práctica, no le ha dado ningún resultado positivo.

En definitiva, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Que todo contribuyente, a partir de la sanción de esta ley, pueda ser sometido a la inspección de la AFIP sin el beneficio del bloqueo fiscal. Dicho beneficio permitía que el inspeccionado, una vez terminado el sueldo mensual y si no tenía más de un 5 por ciento de desfase en su declaración jurada, tuviera inmunidad con respecto a los cinco ejercicios anteriores.

Nosotros creemos que la igualdad ante la ley nos hace pasibles a todos de ser sometidos en cualquier momento a la inspección de la AFIP. Por eso nos parece procedente, y así lo solicito, que se incorpore en este dictamen —tal como venía de la Cámara de Diputados, pero con alguna salvedad que vamos a exponer en el tratamiento en particular— la posibilidad de terminar con el bloqueo impositivo a partir de la sanción y promulgación de este proyecto de ley que estamos considerando.

Por último, debo decir que nosotros consideramos necesaria, como una medida de prudencia administrativa y legal, la incorporación de un nuevo artículo por el cual se derogue el decreto 434 del 30 de mayo de este año a partir de la fecha de promulgación de esta ley. Por eso, en oportunidad de tratar el tema de la derogación parcial, me referí a que íbamos a volver sobre esta misma cuestión.

Señor presidente: quiero dejar sentado nuestro acuerdo en general con el proyecto, adelantando que en oportunidad de su consideración en particular vamos a exponer nuestras diferencias.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Voy a hacer uso de la palabra en oportunidad de la consideración en particular, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. – Yo también voy a realizar algunas expresiones cuando tratemos oportunamente en particular este proyecto.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Varizat.

77

MANIFESTACIONES

Sr. Varizat. – Señor presidente: tenía para formular algunas consideraciones en general y en particular sobre esta iniciativa, pero voy a hacer unas manifestaciones generales.

Hoy, en la reunión de presidentes de bloque, hice hincapié en la conveniencia para este cuerpo de que, en primer término, se tratara y se resolviera en el Senado el tema de los desafueros. Sin embargo, este asunto no está en el temario y no se va a tratar en la sesión de hoy.

Creo que no escapa al presidente del cuerpo y a los demás integrantes que la sociedad nos está tomando examen y quería ver a este Senado sesionando, lo quería ver funcionando y debatiendo, pero debatiendo otros temas. No hemos puesto en este examen la bolilla que el pueblo quería que rindiéramos.

Creo que a la condena que ya ha hecho la sociedad sobre el cuerpo –en cuanto a que aquí se han aprobado leyes a cambio de prebendas–, se va a sumar hoy la sospecha de que en esta Cámara se van a sancionar leyes a cambio ahora de dilaciones y de inmunidades.

Considero que hasta que no se resuelva, y no hago juicios de opinión sobre la culpabilidad o no de los imputados en el desafuero...

Sr. Branda. – No haga ninguno, entonces. Cállese.

Sr. Varizat. – ...hasta que este cuerpo no se expida respecto de esa cuestión, está invalidado; la sociedad va a aumentar la condena sobre este cuerpo y yo no quiero ser cómplice de esa actitud.

Acá hay un acuerdo, acá hay un pacto: se pretende cambiar la dilación en el tema judicial que implica a este Senado y a integrantes del cuerpo por la aprobación de ciertas leyes.

Señor presidente: esto sólo tiene antecedentes de esta gravedad en la Década Infame...

Sr. Branda. – Y en Santa Cruz.

Sr. Varizat. – Y me refiero a la primera década infame, no a la que comenzó con el Pacto de Olivos...

Sr. Branda. – Y en Santa Cruz.

Sr. Varizat. – Y en Santa Cruz funciona la Justicia, funcionan los desafueros, y se expide como corresponde.

Sr. Branda. – Cállese.

Sr. Menem. – No vamos a escuchar tantas estupideces.

Sr. Molinari Romero. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Genoud). – Señor senador Varizat: le pide una interrupción el señor senador Molinari Romero. ¿Se la concede?

Sr. Varizat. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Tengo una curiosidad, señor presidente. No sé si la posición que está expresando el senador es la del bloque peronista federal o es individual, porque escuché expresar al senador Rodríguez Saá, hace unos minutos, una posición totalmente contraria a la que se está exponiendo ahora.

Sr. Gioja. – Y la de Maya también...

Sr. Molinari Romero. – Le pido disculpas al senador por mi pregunta, pero se trata de una cuestión de interpretación sobre la que tengo dudas.

Sr. Presidente (Genoud). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Varizat.

Sr. Varizat. – Yo estoy expresando mi posición personal y los demás integrantes de mi bloque sabrán si me acompañan o no, señor presidente.

Creo que estamos sumando elementos para agravar el escándalo en el que está sumergida esta institución.

Pido a los señores senadores que reflexionen, que nos aboquemos al tratamiento que la sociedad nos está exigiendo, que es el tratamiento de los desafueros, para que después, recién, podamos sesionar con tranquilidad y con algún viso de legitimidad, considerando leyes tan importantes como esta iniciativa.

Me apena que una norma tan importante como ésta tenga que ser sancionada en este marco de descrédito y de ilegitimidad que tiene el Senado.

Señor presidente: adelanto mi voto negativo y no por estar en desacuerdo con el proyecto de ley, sino por estar en desacuerdo con la opor-

tunidad en que se lo trata, porque eso lo vicia de ilegitimidad.

Sr. De la Rosa. — ¡Qué barbaridad lo que dice!

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Preto.

Sr. Preto. — Señor presidente: brevemente, antes de entrar en el tema que plantea el proyecto de ley que tenemos en tratamiento, en función de lo expresado por el senador preopinante y en mérito a mi condición de presidente de mi bloque, debo decir que nosotros, de ninguna manera, hemos omitido la bolilla del tratamiento del tema que nos preocupa a todos. Pero sí se debe respetar —para eso se hace la reunión de presidentes de bloque— que el plan de labor parlamentaria fue elaborado de tal manera que todos hemos decidido que primero se tratarían estos temas y luego inmediatamente pasaríamos a considerar el asunto que todos queremos tratar. Repito: todos lo queremos tratar.

Acá no hay ocultamiento ni ninguna situación en la que se pretenda esquivar el bulto —permítaseme usar este término—, sino que hemos establecido un orden, una cronología en la labor parlamentaria, y así lo estamos pretendiendo respetar.

Además, me hago eco de las palabras que han dicho otros senadores referidas a este tema, especialmente las vertidas por el senador Eduardo Menem, en función también de lo que manifesté como presidente de mi bloque en la reunión de labor parlamentaria.

Vivimos en un estado de derecho y en éste el estado de sospecha no tiene status jurídico. Por lo tanto, no podemos estar en estas discusiones bizantinas considerando —permítaseme la expresión— el sexo de los ángeles mientras tenemos que resolver cuestiones mucho más profundas y más íntegras en un momento —aquí sí comparto el término— en que toda la sociedad argentina nos está examinando.

Dicho esto, voy a pasar a hacer las consideraciones al proyecto de ley que nos ocupa.

Sr. Sergnese. — Pido la palabra para una breve interrupción.

Sr. Presidente (Genoud). — Le piden una interrupción. ¿La concede, señor senador?

Sr. Preto. — Sí, se la concedo.

Sr. Presidente (Genoud). — Para una interrupción breve tiene la palabra el señor senador Sergnese.

Sr. Sergnese. — Señor presidente: antes de que entre en el tema, la verdad es que no hablé cuando hizo el planteo el senador Del Piero pero, como se reitera este planteo, ahora tengo que manifestar mi posición.

Todos los senadores están en el pleno ejercicio de sus funciones mientras el cuerpo no tome una decisión que diga que le sacan algunas de sus potestades o todas.

De esto no hay ninguna duda; es cierto que lo hemos dicho anoche en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales ante la inquietud del senador Ortega y creo que se trata de un tema que está fuera de toda discusión. Porque todas las instituciones del país se manejan de la misma forma. No puede haber un senador, un diputado, un concejal, un juez que, ante el solo pedido de desafuero o de juicio político, deje de cumplir su función, porque entonces bastaría la imputación para que ese solo hecho implicase una condena.

Fíjense que en este caso concreto hemos asistido al tratamiento de varias leyes y no se dijo nada. Hemos votado incluso otros temas y parecería ser que, recién cuando se toca esta ley, es tan importante hacer el planteo.

Entonces tengo que preguntar cómo están direccionados o relacionados estos temas. ¿Por qué una ley sí y otra no? También empezamos a calificar a las leyes, así como calificamos a los senadores.

Estos temas incluso los relacionamos con otros que indudablemente vamos a tener que tratar, que es el de los desafueros. Pero no creo que tengamos que considerarlo analizando si el juez que los solicita tiene pedido de juicio político o no, porque si fuese así bastaría con decir que, como tiene pedido de juicio político, no puede formular el pedido de desafuero. Y, sin embargo, ha estado ejerciendo su función de juez y, en tal carácter, los pide. Podríamos llegar en esta posición hasta el infinito. Entonces, paralizaríamos todas las instituciones de la República por cuestiones de denuncia o de credibilidad. Y sabemos que no debe ser así.

Esto lo ha planteado muy bien el senador Rodríguez Saá; también lo hicieron correctamente el senador Eduardo Menem y el senador Molinari Romero.

Todos los senadores que están acá pueden ejercer en plenitud sus funciones para considerar estas leyes, la que estamos tratando ahora y las que tratamos antes...

Sr. Presidente (Genoud).— Senador Sergnese: había pedido la palabra para una interrupción breve.

Sr. Sergnese.— Soy muy breve y ya termino.

De todos modos, si alguien duda de la legitimidad de esta ley o de cualquier otra, tiene la posibilidad, estando en otras funciones del Poder Ejecutivo, de vetarla si no le gusta.

78

EVASION TRIBUTARIA Y PREVISIONAL (Continuación)

Sr. Presidente (Genoud).— Continúa en uso de la palabra el señor senador Preto.

Sr. Preto.— Refiriéndome, entonces, a la consideración del proyecto que nos ocupa, quiero señalar que en el tratamiento en particular tendré algunas observaciones para formular.

Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, antes de que se vote en general, de manifestar mi más rotundo reparo con respecto al capítulo VII, en función de que significa una modificación de la ley 23.966 ya que, conforme con lo establecido por los artículos 19 y 22 del título III de la ley, ésta constituye una ley convenio. Y, por lo tanto, no puede ser sustituida por otra ley que no tenga tal característica. Especialmente, cuando se encuentran involucrados en el articulado de este capítulo reembolsos o facultades para sustituir reintegros por avales, lo cual significa someter al arbitrio de la autorización que se otorga al Poder Ejecutivo la disposición de recursos que son compartidos con los gobiernos provinciales.

Por esa razón, señor presidente, adelanto desde ya el voto negativo de nuestra bancada a ese capítulo, haciéndome eco, asimismo, de lo manifestado por el señor senador Altuna en cuanto a que esperamos que los derechos legítimamente adquiridos por las provincias patagónicas sobre la exención —en distintos porcentajes, de acuerdo con la ubicación geográfica— del impuesto a la transferencia a los combustibles no se vean vulnerados en el futuro por intermedio de normas, regulaciones o resoluciones que hagan improbable o imposible el sostenimiento de dicho beneficio.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Villarroel y luego —para concluir— el señor senador Gioja.

Sr. Villarroel.— Voy a ocupar dos minutos, nada más, señor presidente y señores colegas, para anunciar mi voto afirmativo en general al proyecto de ley que estamos considerando y para dejar implícito con ello que no tengo la menor duda sobre la legitimidad de la sanción que se va a disponer por el cuerpo y sobre todos y cada uno de los votos que, en uno u otro sentido, se puedan verter en la votación.

La Constitución —que sepamos— no subordina la legitimidad de las leyes a los resultados de las encuestas de opinión pública. Si yo pensara que vamos a ser coherentes en las afirmaciones que se hacen, habría que decir que quienes se apoyan en las encuestas para cuestionar la legitimidad de una norma tendrían, en realidad, que optar por el silencio absoluto.

Porque tales encuestas, lo que dicen, no es que el 91, el 92 o el 93 por ciento de la población tiene sospechas sobre el Senado, sino que el 93 por ciento de la gente opina que todo el Senado está corrupto. Y ese “todo”, desde luego, no deja excepción alguna.

En cambio, en los únicos lugares donde sí se hacen discriminaciones es, casualmente, en las respectivas jurisdicciones de origen de nuestros mandatos. No nos debemos olvidar de que nosotros somos representantes de las provincias. Y en nuestras provincias no nos guiamos por encuestas, sino por otras cosas que son mucho más claras, honestas y honradas, como los saludos de nuestros vecinos y las caras con las que nos miran cuando nos encuentran. Desde ese punto de vista, no tenemos mayores preocupaciones. Por eso, a nosotros no nos interesan esas cosas que, a otros, quizás sí.

Hoy he leído un brillante artículo, breve además, de un periodista de “La Prensa”, que recoge una frase de Jorge Luis Borges en un cuento que se llama “Utopía de un hombre que está cansado”. Borges, en ese cuento, dice algo más. Recuerda el adagio latino que, dicho en criollo, sostiene que “ser es ser percibido”.

Realmente, para algunos parece que la existencia depende de algún certificado de existencia mediática que le den las pantallas, los titulares de los diarios o las fotografías...

Sr. Branda.— ¡Muy bien!

Sr. Villarroel.— Creo que a nosotros, a los que estamos representando distritos y a gente con caras que conocemos —donde a veces nos saludamos, porque nos conocemos con todos, tanto es así que, cuando llega alguien que es forastero, enseguida nos damos cuenta porque no lo conocemos—, no nos preocupan tanto las encuestas. Dicho sea esto desde el punto de vista de cierta licenciatura sociológica porque, desde el punto de vista jurídico, no existen dudas.

Sr. Branda.— ¡Muy bien, senador Villarroel!

Sr. Menem.— ¡Muy bien!

79

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa.— Señor presidente: he escuchado dos exposiciones en las que se ha puesto en duda la legitimidad del cuerpo para aprobar estos proyectos de ley.

En consecuencia, en atención a las ulterioridades de algún reclamo que pueda existir en el futuro, pregunto si estas exposiciones pueden ser consideradas como una moción de orden sobre la cual el cuerpo deba pronunciar se específicamente mediante una votación, a fin de evitar dudas acerca de la legitimidad que estamos defendiendo. Este es mi planteo concreto, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Galván.

Sr. Galván. — Señor presidente: en primer lugar, y dicho esto con mucho respeto hacia mis colegas, debo decir que entro de rondón en este debate; estuve en otras ocupaciones vinculadas a la defensa de mi libertad.

Se ha hablado aquí —por lo que acabo de escuchar recientemente— de la legitimidad, de la validez y de la constitucionalidad de las leyes aprobadas en estas especiales circunstancias por las que atraviesa el Senado de la Nación.

En ese sentido, quiero fundar en muy pocas palabras la intención de mi voto, cualquiera fuere, seguramente afirmativo, en atención a la naturaleza de la norma que estamos tratando.

He sido requerido por un juez federal, que ha solicitado el desafuero total de este senador, representante del estado federal de La Rioja.

No es éste el lugar ni el momento para expresar las razones que ha tenido el magistrado

para adoptar esa decisión, porque dice mi responsabilidad republicana que, frente al requerimiento de un magistrado de la República, debo acudir a su llamado, más allá de las formas procesales. Porque dice mi fe republicana que en cualquier sitio y delante de cualquier magistrado, los hombres de bien no deben temer ver, quizás a través de alguna intencionalidad, ese viejo rostro de la infamia.

Pero ya haré las defensas; ya haré lo que otros hicieron o lo que por otros hice en otros tiempos. Ya acudiré a los estrados judiciales.

De lo que no tengo ninguna duda, señor presidente y señores senadores, es de la validez de mi voto. El voto que voy a dar es incuestionable mientras una sentencia judicial firme y consagrada diga que no es así.

Porque los fueros parlamentarios, señor presidente, no son privilegios de la Edad Media sino que constituyen el resguardo que tienen los cuerpos democráticos para funcionar libres de toda coacción, de cualquier naturaleza que ella fuera, sea del poder o de la opinión pública, con todo el peso que ésta tiene en la gravitación de las decisiones.

Sería un funesto precedente vacilar respecto de nuestra responsabilidad. Sería la siembra de la duda democrática que, frente al señalamiento que formule un magistrado —cualquiera fuere—, los representantes del pueblo en los cuerpos democráticos de la Nación estuviéramos titubeando acerca de cuál ha de ser la dirección de nuestra decisión definitiva. Mientras un juez no me remueva del cargo a través del principio y del respeto a todas las normas que hacen al sagrado derecho que tenemos todos los ciudadanos de un juicio justo y de un juez natural, no voy a vacilar en votar las leyes de la República. Porque sería de un enorme peligro para la democracia que investigaciones que pueden ser auténticas, transparentes y democráticas puedan ser movidas por intereses ocultos que quieren perforar la autonomía de los cuerpos.

Entonces, ¿qué decimos los hombres democráticos, los que creemos en nuestras convicciones, los que volvemos a las fuentes y a los orígenes, lo que hicimos algunos senadores como los de La Rioja! Para algunos esto fue un chiste, porque no conocen la vocación democrática de los que acudimos y no conocen el derecho público provincial. La Constitución de La Rioja establece que la Legislatura de mi provincia me

puede instruir, así como a los senadores Menem y Yoma, para votar leyes en el Congreso. La fuente de legitimidad no está, como lo estará el año que viene, en la voluntad general de la que nos hablaba Rousseau. Está en la Legislatura, compuesta por los representantes del estado federal, en este caso de La Rioja.

Además, dice el artículo 102, inciso 16, si no me falla la memoria, que la Legislatura de La Rioja puede pedir la remoción de sus representantes ante este cuerpo federal de la Nación si se apartan de las obligaciones que tienen con el pueblo de esa provincia.

Entonces digo a aquellos que, con ligereza, acostumbrados al cálculo electoral, han calificado esta actitud, que no se los voy a permitir. Son los mismos que dudan de que uno puede ser capaz de tomar una decisión y que, si bien es cierto que es patrimonio de mi partido, hemos dado muestras de que somos capaces de adoptar una actitud honrada, no por el pedido de nadie, ni por la insinuación de algunos sino por la fuerza del carácter del que ha sido presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.

Señor presidente: para terminar, ya que mencionó a Borges mi distinguido colega de Catamarca, me acuerdo de José Martí cuando decía: "Envilece al hombre la búsqueda de la fama".

Entonces, dice mi responsabilidad que voy a votar todas las leyes, con todas las potestades que vienen de mis mandantes. Y mientras un juez federal no me arreste o me detenga no voy a hacer ninguna concesión de mis responsabilidades históricas.

Que quede en claro, señor presidente y señores senadores, cuál es la posición de este humilde senador por La Rioja, que forma parte del bloque de la Unión Cívica Radical. (*Aplausos*)

80

EVASION TRIBUTARIA Y PREVISIONAL (Continuación)

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor presidente del bloque justicialista, senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: voy a tratar de asumir la responsabilidad que tengo, intentando no opinar sobre lo que se acaba de decir, porque estoy absolutamente convencido de que aquí hay dos andariveles: uno que tiene que ver con la Comisión de Asuntos Constitucionales,

en la que se encuentra este tema y donde existe la decisión de que la Justicia actúe libremente, sin ningún tipo de interferencia, y otro vinculado con el compromiso que asumimos esta mañana, de trabajar, sancionar leyes y cumplir con la misión que las provincias nos han encomendado.

Con relación al proyecto de ley antievasión quiero, muy sucintamente, recordar palabras del señor presidente de la Nación, doctor De la Rúa, que textualmente dijo: "Sé que la mayoría de la población, con sacrificio, paga sus impuestos, pero hay una pequeña minoría, de altos recursos, que evade, y esto determina una pérdida de miles de millones de pesos para el Estado que, les aseguro, pienso recuperar". Más adelante el Presidente dijo: "Evadir es un delito y yo voy a tratar a los grandes evasores como delincuentes".

Con la esperanza de ver cumplidas las promesas del presidente de la Nación le decimos: "Manos a la obra". Esperemos que ésta no sea otra promesa incumplida.

Sr. Presidente (Genoud). – Se va a votar en general el proyecto de ley en consideración.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Sobre un total de 60 senadores presentes, se registran 2 votos por la negativa y 58 por la afirmativa.

En consideración en particular.

Sr. Maya. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. – Señor presidente: quiero plantear una modificación en el artículo 1º.

Considero que el texto propuesto puede ser objeto de profundos cuestionamientos en el ámbito jurídico, dado que colisiona con la estructura del derecho civil y comercial, cuestión que quedaría salvada con esta modificación que propondré, que acabo de consultar con el presidente de la comisión, ya que haría compatible la norma con la legislación general.

En la introducción del artículo 1º propongo agregar lo siguiente: "A los fines impositivos, no surtirán efecto...", siguiendo luego con el resto del artículo, tal como está redactado. No puede ser que quitemos la valoración que el Código Civil confiere a los pagos individuales o a las transacciones particulares. Es posible que no-

sotros circunscribamos esta situación exclusivamente al ámbito impositivo, pero no podemos habilitar una doble vía de cobro cuando no se han cumplido las pautas que este capítulo establece, ya que ello implicaría violentar la estructura general del derecho civil o los acuerdos que las partes establecen entre sí a los fines de saldar sus obligaciones pendientes.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: considero que la redacción de este artículo implica la modificación del artículo 724 del Código Civil. En efecto, tanto cuando se efectúe un pago en efectivo por un monto menor a 10 mil pesos como cuando se haga uno superior, deberá tomarse en cuenta esta normativa. Es decir que el artículo 724 del Código Civil, que señala que las obligaciones terminan con el pago, estaría modificado por este artículo que se refiere a distintas formalidades.

De manera que, a efectos de la correcta interpretación, quiero decir que este artículo modifica el 724 del Código Civil al establecer que las obligaciones se extinguen por el pago en dinero hasta la suma de 10 mil pesos y por sumas superiores a través de los medios establecidos en este proyecto de ley.

Si no se incorpora, por lo menos que quede claro que ésa es la interpretación que debe darse al artículo 724 del Código Civil.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: en primer lugar, vamos a proponer que se vote por capítulos.

En segundo lugar, vamos a aceptar la modificación propuesta por el señor senador Maya al artículo 1º.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. – Señor presidente: consideramos que hacer el agregado que solicita el señor senador Maya reduce los efectos de este proyecto de ley.

Por lo tanto, según nuestro criterio no sería procedente realizar el agregado propuesto.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. – Señor presidente: quiero ser claro respecto de la observación del señor senador proopinante.

Pienso que es atinado lo que señala el señor senador Altuna en cuanto al objetivo de eliminar y combatir la evasión tributaria y previsional en forma efectiva. Pero con ese objetivo no podemos violentar normas estructurales del Código Civil. Debemos limitar la cuestión a crear una complicación impositiva para quien efectúe pagos de más de diez mil pesos fuera de las previsiones de este proyecto. Pero el poder cancelatorio que establece el artículo 724 del Código Civil y la normativa general de los pactos del derecho civil o comercial no los podemos violentar con este proyecto sin cambiar la estructura del Código Civil.

Entonces, este proyecto será igualmente efectivo porque el que realice pagos superiores a los diez mil pesos en efectivo sabe que va a adquirir el carácter cancelatorio entre las partes, pero también conoce que se está arriesgando a una circunstancia recriminatoria en el ámbito impositivo porque a los fines de la Dirección General Impositiva no tiene poder cancelatorio y deberá establecer información sumaria u otra alternativa probatoria para suplir la vía diferente que adopta al pagar con una metodología distinta a la que consigna el artículo 1º.

Por eso...

Sr. Branda. – ¿Me permite una breve interrupción, señor senador?

Sr. Maya. – Cómo no.

Sr. Presidente (Genoud). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. – Señor presidente: es tan así lo que dice el señor senador Maya que si este proyecto modificara el Código Civil debería haber sido girado a la Comisión de Legislación General, y eso no ha sucedido.

O sea que esto abona lo que dice el señor senador Maya.

Sr. Presidente (Genoud). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. – Señor presidente: creo que, realmente, en alguna forma la norma no adquiere un carácter tan imperativo al incorporarle esta modificación. Pero el que ejecuta un pago superior a esta suma sabe que tiene pendiente un conflicto con la Dirección General Impositiva y quienes operan en estas magnitudes, a mayor nivel de pago, mayor será la duda de su respuesta y la complejidad de argumentaciones que

deberán instrumentar para hacer efectivo su descargo ante la Dirección General Impositiva.

Por eso, creo que es fundamental para la seguridad jurídica, para no avanzar en una modificación del Código Civil —no sólo debería modificarse el artículo 724 sino también otra serie de artículos— y a efectos de ratificar el consentimiento planteado por el señor presidente de la comisión, que se introduzca en el primer párrafo la modificación que había planteado que decía: “A los fines impositivos...” y así circunscribir la norma de la manera que había detallado.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: si se va a votar por capítulos, como se ha expresado, quiero hacer un comentario con respecto al artículo 9°.

El cheque cancelatorio, que en realidad es un título, van a tener que emplearlo las pequeñas empresas que no tienen cuenta corriente. Si no, es fácil pagar con un cheque.

A través de este proyecto podríamos llegar a imponerle un costo adicional. De manera que al artículo 9° le agregaría: “En ningún caso se autorizará el cobro de comisión y gastos por emisión y venta de dichos títulos cancelatorios”.

La idea sería que a aquellos que no tienen cuenta corriente no se les agregue un costo adicional —por una comisión del banco— para poder comprar el título.

Y con respecto al artículo 10, también hay un gasto adicional, porque el endoso de estos títulos tiene que estar certificado ante escribano público o autoridad judicial. Creo que la autoridad bancaria podría certificar el endoso.

De manera que propongo que el último párrafo del artículo 10 quede redactado así: “Los endosos serán certificados por escribano público, autoridad judicial o autoridad bancaria”.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell.— Señor presidente: considere que la propuesta formulada por el señor senador Maya cambia sustantivamente el espíritu de la ley.

Apelo al sentido jurídico del senador y de quienes han evaluado esta norma. ¿Qué sentido tiene que el inicio del artículo diga “a los efectos impositivos”?

Ya sabemos que la ley tiene como objetivos aspectos impositivos. Lo que la ley busca a tra-

vés de este artículo es, efectivamente, modificar el Código Civil alterando el artículo 724 y modificando los sistemas de pago, para establecer de este modo un cerrojo a la evasión.

Es un tema que hubiera ameritado un debate en comisión. Pero a primera vista, se me ocurre que esta propuesta desnaturaliza la idea del artículo.

El proyecto de ley en su totalidad tiene un sentido impositivo. Esto importa una clara modificación de los medios de pago consagrados en el Código Civil. Y creo que si reducimos “a los efectos impositivos”, como propone el senador Maya, estamos cambiando la esencia de este título, lo cual no me parece una cuestión menor.

No me parece correcto que por preservar la integridad del Código Civil se vulnere la esencia de la propuesta antievasora que contiene el artículo.

Sí comparto las previsiones del senador Ulloa. En todo caso, considero que el artículo 9° debe tener la previsión que él sugiere, y que el artículo 10, en el segundo párrafo, debe prever ambas instancias. Es decir que la certificación pueda hacerse por autoridad bancaria o por escribano público o juez de paz, o sea por fedatarios.

Este sería un modo de evitar que la antievasión genere mayores gastos para la actividad económica de los argentinos.

Repito, creo que esta cuestión merece una reflexión profunda. Quienes somos abogados, agucemos nuestros conocimientos de derecho civil y tratemos de introducirnos en el verdadero propósito del artículo 1°.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino.— Señor presidente: voy a hablar en la misma dirección que el senador Carbonell.

Tengo la percepción de que si incorporamos esa frase, lavamos absolutamente la ley. No tiene ningún sentido llamar a esta ley “antievasión” si incorporamos un párrafo como éste. La ley quedaría absolutamente lavada.

Es cierto que los modos cancelatorios del artículo 724 del Código Civil serán modificados por esta ley. Que individualmente después, como todo lo que es de derecho privado, pueda irse a cualquier juez y revisarse en un caso concreto, es otra cosa.

Si alcanza o no a ser cancelatorio, es una situación individual en conflicto. Pero incorporar

al artículo ese tipo de párrafo, lava absolutamente la intención del proyecto de ley y se caen las previsiones que de alguna manera se intentan hacer para evitar la evasión fiscal. Por eso no comparto que se modifique el dictamen en este aspecto.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Maya.

Sr. Maya. – Señor presidente: quiero ampliar la fundamentación de la propuesta porque desde ningún punto de vista tiene el objetivo de lavar o debilitar la ley o que las cosas se mantengan en el estado actual. Lo que quiero evitar, si se realiza un pago cancelatorio por un sistema no convencional o alguno que no está previsto en esta nueva norma, o por un sistema no habitual, es que el acreedor tenga la posibilidad de cobrar dos veces, que es lo que en realidad ocurriría en este caso.

Esto es grave porque muchas operaciones se cancelan, inclusive transitoriamente, por sumas superiores a éstas, por métodos de pago diferentes a los cinco previstos en el artículo 1º. Además, la instrumentación implica un mayor costo en las operaciones comerciales.

A resguardo del objetivo del proyecto de ley, en la propuesta impongo a quien instrumente un pago fuera de estas previsiones la carga complementaria de correr el riesgo impositivo. Sin duda que con esta ley no nos estamos refiriendo a los pagos cancelatorios de 10.000, 15.000 o 20.000 pesos sino que estamos apuntando a los grandes evasores, que no son los que pagan en efectivo una cuenta familiar o una transacción de esos montos. Nos estamos refiriendo a las grandes operaciones, en las que evidentemente no se va a realizar un pago fuera de estas previsiones corriendo el riesgo de que en la faz impositiva los que lo hagan queden sujetos a recriminaciones que impliquen sanciones.

El objetivo de la propuesta es hacer efectiva la ley, pero no al extremo de que los pequeños pagos cercanos a los 10.000 pesos sean objeto de un doble cobro, o sea un pago cancelatorio aceptado por deudor y acreedor, pero como se hace fuera de estas previsiones del artículo 1º, habilita al acreedor a pedir el pago de vuelta. Tengamos en cuenta que el proyecto de ley dice: “No surtirán efectos entre las partes ni frente a terceros...”. Esto es gravísimo y violatorio de toda la estructura del Código Civil. No pode-

mos con este proyecto avanzar hacia la totalidad de la estructura del Código Civil sin hacer una modificación más profunda.

Me parece que con la modificación que planteo, que es crear la complicación impositiva, estamos resguardando a los grandes inversores y también a los pequeños, dándoles una seguridad, dejándoles sólo la complicación de la face-ta impositiva.

Por lo tanto, ratifico el planteo que hice. Creo que con la modificación no se lava el sentido del proyecto, ni en todo ni en parte. Pero en lo que no afecta para nada es con relación a los grandes evasores, que ineludiblemente van a caer dentro de las previsiones y objetivos de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Villarroel.

Sr. Villarroel. – Señor presidente: lo que han expresado los senadores Carbonell y Alasino es lógico. Si no se aprueba la norma tal como está, ¿qué efecto impositivo va a haber? Si el tema es que la AFIP no se va a enterar de que hubo una operación por más de diez mil pesos. Ese es claramente el sentido del proyecto de ley. Por eso es que se le quita efecto cancelatorio.

Además, si eventualmente se diera el caso de que algún deudor que no conozca el derecho, contra la presunción del Código Civil paga sin que se instrumente algunos de los métodos fijados por el artículo 1º, es evidente que ante la demanda del acreedor malicioso, llevado el caso ante la Justicia va a poder argumentar, y con todo éxito, un error de hecho excusable por la circunstancia, según sea el caso.

Si se suprime esta cuestión de que destituye de efecto cancelatorio a los pagos superiores a diez mil pesos, directamente la AFIP no se entera de la operación superior a ese monto, con lo cual no se cumple el sentido del proyecto de ley.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Carbonell.

Sr. Carbonell. – Señor presidente: para abundar en los conceptos que vertí recién y con el Código Civil en la mano, quiero aclarar que cuando el Título XVI de la parte segunda se refiere al pago menciona, en el artículo 724, que las obligaciones se extinguen por todos los medios que los abogados conocemos: compensación, transacción y, entre otros, el pago. El artículo 1º

del proyecto que estamos analizando habla sólo de este último y tiene un sentido coercitivo al uso de los medios de pago. Está eliminando expresamente la posibilidad de los pagos en efectivo y ese es el verdadero sentido antievasión de la norma.

Analizando todo este título, no advierto en el Código Civil el estricto contenido de una modificación expresa. A lo mejor esta ley y este artículo podrían rozar el texto del artículo 744 cuando habla de “si se debiese suma de dinero...”, etcétera. Pero siempre las sumas de dinero van a mantener su carácter de tales, nada más que hay medios que a lo mejor no existían en la época en que se sancionó el Código Civil y que hoy la modernidad nos permite utilizar. Y la previsión del punto 2 del artículo 1º, de los giros o transferencias bancarias, exime de la obligación de tener cuentas corrientes o de generar gastos adicionales a la obligación de pagar.

Está claro que esto importa una limitación, un obstáculo, una restricción al modo de cancelar una obligación de pago, pero también lo está que se persigue un objetivo superior para la Nación, que es evitar la proliferación de la evasión.

Estamos ante la circunstancia de elegir entre un mal menor y ponderar un bien superior. Creo que éste es el sentido de la norma. Lo veo tan claro que me parece que entraríamos en una desnaturalización del texto y de los objetivos si incorporáramos la propuesta de “a los efectos impositivos”.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: voy a apoyar la propuesta del senador Maya, porque un pago en curso legal hecho no va a tener efecto entre partes sino a los fines impositivos.

Realmente, no veo el sentido de este artículo 1º de impedir u obstar al efecto entre partes de un pago hecho en moneda de curso legal. Pero como todo el texto de la ley es igual a la mayoría de los actos que en materia económica produce este gobierno, es decir inservibles, inútiles y que generan efectos contrarios a los que pretenden buscar, esta ley para lo único que va a servir es para obstaculizar a los que operan en blanco mientras que los que operan en negro lo seguirán haciendo. Reitero: como todos los actos que genera este gobierno en materia económica esta ley es inservible, inútil, va a aumentar

la economía marginal y va a traer muchísimos mayores problemas de los que pretende solucionar.

Por eso, además de apoyar lo que dice el señor senador Maya, no veo cómo no va a tener efecto entre partes este pago porque si no es a los fines impositivos esta ley no sirve para nada. No tiene ningún efecto en la economía cotidiana ni mucho menos va a aumentar la recaudación en las arcas del Estado porque consolida la situación de los que operan en negro.

Sr. Presidente (Genoud). – Se va a votar el capítulo I, artículos 1º a 11.

Recuerdo a los señores senadores que hay una norma que establece que por cada tema cada senador puede hablar en una sola oportunidad. Pero esto se ha ido flexibilizando hasta el punto que hace que se prolonguen indebidamente los debates.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: simplemente quiero saber si el señor miembro informante acepta la modificación de los artículos 9º y 10 que hemos propuesto con el señor senador Carbonell.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Verna. – Pido que se vote por artículos por lo menos este primer capítulo porque, evidentemente, hay diferencias. Por otro lado, la comisión acepta la propuesta del senador Maya.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Altuna, para conocer qué hace el bloque de la Alianza.

Sr. Altuna. – Que se vote artículo por artículo, señor presidente; al menos, en este capítulo. Después veremos los restantes; si no tenemos diferencias, no hay problema. Si se introduce la sugerencia del senador Maya, anticipo que no vamos a dar los dos tercios.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por el senador Maya. Tenemos que consignar el número de votos...

Sr. Carbonell. – Perdón, señor presidente. Pero hay otra moción: pido que el artículo mantenga su texto tal como está.

Sr. Presidente (Genoud). – Claro, pero a mí me corresponde someter a votación el dictamen de comisión con la modificación del senador Maya, y después...

Sr. Altuna. – Señor presidente: entiendo que debe someterse a consideración el dictamen de la mayoría tal como está, y después...

Varios señores senadores. – ¡No!

Sr. Presidente (Genoud). – La Presidencia es la que ordena el debate.

Sr. Altuna. – Obviamente.

Sr. Presidente (Genoud). – El presidente de la comisión –que es el miembro informante– es quien tiene la prioridad en este caso. Por lo tanto, como ha anunciado que acepta la modificación propuesta por el senador Maya al artículo 1º, corresponde votarlo en primer lugar. Es necesario consignar los votos, por los que les pido que permanezcan con las manos en alto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Han resultado 22 votos por la afirmativa sobre un total de 49 votos. De tal modo que queda rechazado el artículo 1º con la modificación propuesta por el senador Maya.

Salvo mejor criterio de la Cámara, correspondería someter a votación el artículo conforme lo solicitara el miembro informante del despacho de minoría.

Sr. Yoma. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. – ¿Qué pasaría si tampoco obtiene mayoría el artículo tal como está redactado?

Sr. Presidente (Genoud). – Usted es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su opinión es muy valorada...

Sr. Yoma. – Entonces, que vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se expida.

Varios señores senadores. – ¡No!

Sr. Yoma. – Si no obtiene mayoría, va a tener que girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). – Seguramente, la sensatez y madurez de los señores senadores nos van a permitir salir de esta duda...

Sr. Yoma. – Le aviso que voto en contra de esta ley.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Maya.

Sr. Maya. – Señor presidente: o sea que los que votamos ahora por un dictamen podemos

votar por el otro; tenemos dos votos. Estaríamos casi en un razonamiento “frepasista”: una cosa se dice acá y otra en otro lado. *(Risas.)* Me parece que no estamos en condiciones de votar por la afirmativa el despacho de minoría quienes votamos por la afirmativa el despacho de mayoría. Salvo que...

Sr. Presidente (Genoud). – Digamos que el artículo 1º con la modificación del senador Maya no obtuvo mayoría. Por lo tanto, voy a someter a votación el otro texto. Si tiene mayoría, no hay problema. Si no, tendremos que reconsiderar la votación hasta que encontremos la solución al artículo 1º...

Sr. Rodríguez Saá. – No hay artículo.

Sr. Presidente (Genoud). – Hay un artículo 1º sin la modificación del senador Maya.

Sr. Rodríguez Saá. – Si se vota ahora por el despacho de la comisión y resulta no aprobado, se pasa a votar el artículo 2º, porque el artículo 1º no fue aprobado en ninguna de sus propuestas. Es muy simple: no habría artículo 1º.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Molinari Romero. Les pido que por favor aportemos lo mejor de nuestras capacidades para resolver este problema reglamentario.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: no sé si voy a aportar claridad, pero tal vez los senadores que tienen más experiencia pueden aclararlo.

Acabamos de asistir a una votación de las comunes y normales en la Cámara. Ha existido una propuesta, que fue la que hizo el senador Maya, que ha tenido mayoría; pero no ha alcanzado los dos tercios...

Varios señores senadores. – ¡No!

Sr. Molinari Romero. – ¿No aporte claridad, señor presidente?

Sr. Presidente (Genoud). – No; quiero señalarle que no obtuvo la mitad más uno de los votos.

Sr. Molinari Romero. – Ahora me lo ha aclarado.

Sr. Presidente (Genoud). – Vamos a someter a votación el artículo 1º sin la modificación del senador Maya. Si nos encontramos con el problema, lo vamos a resolver después.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado el artículo 1° sin la modificación del senador Maya., por mayoría simple.

Sr. Maya – ¿Cuántos votos afirmativos, señor presidente?

Sr. Presidente (Genoud). – Veintinueve.

–Se enuncia el artículo 2°.

Sr. Ulloa. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – En consideración...

Sr. Ulloa. – He pedido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Ulloa; no lo veía bien.

Sr. Ulloa. – Usted no mira a la derecha, señor presidente... Ni a la izquierda (*Risas*).

Como dije en el debate en general...

Sr. Presidente (Genoud). – No quiere decir que usted está a la derecha... ¿Eso me quiso decir? (*Risas*.)

Sr. Ulloa. – El Capítulo II...

Sr. Presidente (Genoud). – Estamos tratando el artículo 2°.

Sr. Ulloa. – Discúlpeme, señor presidente. Pensé que estábamos tratando el Capítulo II.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2°.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado el artículo 2° por unanimidad.

–Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente (Genoud). – Perdón, ¿alguien no votó a favor?

Sr. Yoma. – Yo, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). – Bueno; un voto por la negativa.

Sr. Yoma. – Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo con respecto a toda la ley.

Sr. Presidente (Genoud). – Perfectamente.

Un voto negativo en soledad en toda la ley. (*Risas*.)

–Se enuncian y aprueban los artículos 3° a 8°.

–Se enuncia el artículo 9°.

Sr. Altuna. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. – Señor presidente: entiendo las propuestas de los señores senadores Ulloa y Carbonell. Pero me parece bien que se fije un valor para los cheques cancelatorios.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros vamos a aceptar la propuesta del señor senador Ulloa en el sentido de que el cheque cancelatorio no tenga valor y de agregar al final del artículo 10 que los endosos serán certificados por escribano público, autoridad judicial o autoridad bancaria.

Sr. Alasino. – Lo demás no lo aceptan...

–Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. – Señor presidente: mi intención era establecer aquí una norma para que luego el Banco Central no le fije valores. Por eso me parece bien la moción recientemente fundada en el sentido de que en el artículo 10 –incluso en el 9°– se establezca debidamente que los cheques cancelatorios que emita exclusivamente el Banco Central serán sin cargo alguno para el solicitante.

En consecuencia, considero que podríamos reformular los artículos 9° y 10 en este sentido, si hay acuerdo de la Cámara.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. – Señor presidente: este proyecto de ley introduce como nueva figura el cheque cancelatorio dándole características específicas.

Es un instrumento nuevo que considero apropiado de la manera en que figura en el dictamen. Además, introducir más elementos sería entrar en cuestiones reglamentarias que hacen a la autoridad bancaria.

Reitero: este proyecto de ley crea un nuevo instrumento. Ese instrumento es el cheque cancelatorio. Mantiene los cheques común y diferido como los conocemos y agrega el cancelatorio que –reitero– es un instrumento distinto. Establece para él un mecanismo determinado y deja las cuestiones menores libradas a la autoridad de la entidad bancaria.

Considero que el dictamen es correcto en este sentido, por lo que propongo la aprobación de este artículo.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Yo quiero plantear al señor senador Alasino que estamos facultando al Banco Central para que determine las condiciones en general. Pero creo que es voluntad de esta Cámara que una de las condiciones sea el carácter no oneroso del cheque cancelatorio. Entonces, esa condición tiene que figurar explícitamente porque no está sujeta a la disposición del Banco Central sino a la resolución del Congreso de la Nación.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. – Señor presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa el miembro informante. De lo contrario, según el artículo 9º, concluiríamos que los cheques serán vendidos al público, lo cual nos está dando la condición de que serán onerosos. Entonces, si es deseo de esta Cámara que así no fuera, debemos expresarlo como corresponde en este artículo.

En consecuencia, soy de la opinión de introducir un agregado debidamente fundado a efectos de que estos cheques sean de carácter gratuito para aquellos que lo soliciten.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: si usted me permite voy a leer mi propuesta: “En ningún caso se autorizará el cobro de comisión y/o gastos de emisión y venta de dicho cheque cancelatorio”. Personalmente considero que debería llamarse “título”, para que no hubiese dudas, pero dejémoslo así.

Al final del artículo 10 agregaría –como dijo el señor miembro informante– la expresión “y/o por autoridad bancaria”.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Aceptamos la modificación propuesta por el senador Ulloa, tal como él la ha expresado; y donde dice: “...los cheques cancelatorios serán vendidos al público...”, deberá reemplazarse la palabra “vendidos” por “entregados”, quedando: “...serán entregados al público...”. De lo contrario, serían onerosos.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º, conforme la moción del senador Altuna.

Sr. Verna. – Ulloa.

Sr. Presidente (Genoud). – Sí, con el agregado formulado por el senador Ulloa. ¿Está claro el texto, a los efectos de evitar complicaciones?

Varios señores senadores. – Sí.

Sr. Presidente (Genoud). – Entonces, los que estén por la afirmativa, sírvanse así indicarlo levantando la mano.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado el artículo 9º por más de los dos tercios de los votos.

–Se enuncia el artículo 10.

Sr. Altuna. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Altuna para referirse al artículo 10 –con la modificación también propuesta por el senador Ulloa.

Sr. Altuna. – Sí, el artículo 10 debe decir, al final: “Los endosos serán certificados por escribano público, autoridad judicial o autoridad bancaria”.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 con la modificación propuesta.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado por más de los dos tercios de los votos.

–Se enuncia y aprueba el artículo 11.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado por los dos tercios de los votos.

Quiero consignar que todas las aprobaciones que se han hecho –a excepción de la del artículo 1º– han sido por más de dos tercios de los votos.

–Se enuncia el capítulo II, artículos 12 y 13.

Sr. Ulloa. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: en el segundo párrafo del artículo 12 se faculta a la autoridad de aplicación –la Secretaría– a establecer sistemas electrónicos de medición y control.

Quiero señalar que esto ha sido propuesto por la única empresa —al margen de que pudiera haber otras propuestas— que en el país produce los chips. Son 50 millones de cabezas, con 12 o 15 millones de terneros que nacen al año, y de alguna manera puede pensarse que es una única empresa la que venderá los chips. Si bien la norma no dice que se pongan de inmediato, representa un costo adicional y es un sistema que no ha funcionado adecuadamente en otros países, aunque sí tiene ventajas, por la identificación del animal que ello permite, ya que éste pasa por un sensor que lo identifica y establece de qué animal se trata.

No obstante, propongo la supresión del segundo párrafo del artículo 12.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: lo propuesto por el senador Ulloa es correcto. Creo que hoy los costos de producción para el sector agropecuario y ganadero dejan muy poca rentabilidad. Con esto vamos a encarecer más aún los costos. Considero que se trata de una medida que va a perjudicar a nuestro castigado sector ganadero. Lo que necesitamos es reactivar tanto la ganadería como la agricultura, que son las cenicientas del país ante los privilegios de las grandes empresas, los monopolios internacionales, que realmente son los que reciben hasta los subsidios que les da la Nación.

En consecuencia, aclaro personalmente que estoy completamente de acuerdo con la propuesta del senador Ulloa.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: lamento discrepar con mi correligionario y con el senador Ulloa pero nosotros vamos a votar el artículo tal como está redactado, porque aquí no se trata de ver solamente el problema de los costos. Esta norma tiende a otro objetivo, que es el de evitar todo tipo de evasión que pueda estar encubierto.

Creo que hoy nadie puede negarse a reconocer los nuevos sistemas, los sistemas electrónicos de medición y control de la producción. Este método va a “aggiornarnos” en cuanto a la producción y a los controles, evitando la evasión.

Nosotros vamos a insistir en votar este artículo tal como está redactado.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti. Le pido que sea bre-

ve porque ya ha hecho uso de la palabra en la consideración del artículo.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: evidentemente los argentinos somos masoquistas y estamos al servicio de los grandes intereses. Aquí en el país las grandes empresas evaden 20 mil millones de pesos. Yo pregunto, ¿qué se hace para combatir la gran evasión que existe en el país? Quiere decir que acá los ganaderos somos los grandes evasores y los que debemos pagar las consecuencias que hoy vive el país por la evasión que se hace.

Acá la evasión, nos guste o no, proviene de las grandes empresas, los monopolios internacionales, la privatización de las empresas y los servicios que prestan a un precio extraordinariamente elevado. Y vamos a “cargar las tintas” contra el sector agropecuario, que está castigado, que no tiene subsidios y que no puede competir, por un sinnúmero de problemas. Entonces, seamos justos; yo sostengo que ésta es una medida que afecta los intereses del país y de la ganadería. Por lo tanto, voy a votar en contra.

Sr. Presidente (Genoud). — La Presidencia, a partir de ahora, en las votaciones en particular va a conceder la palabra a los señores senadores en una sola oportunidad, porque de lo contrario se va impedir la votación de otras leyes que tenemos que tratar después.

El senador Rodríguez Saá había pedido la palabra.

Sr. Rodríguez Saá. — Cuando el senador dice “los ganaderos somos”, no sé si me está incluyendo a mí. Yo no estoy tampoco ahí. (*Risas*)

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Rostan.

Sr. Rostan. — Señor presidente: yo escuché al senador Ulloa hablar de chips. En ninguna parte el proyecto de ley habla de eso concretamente. En su artículo 12 dice: “Todas las plantas industriales de faenamiento de hacienda y molienda de trigo tendrán la obligación para su funcionamiento, de incorporar sistemas electrónicos de medición y control de la producción, inclusive sistemas que funcionen en tiempo real, de conformidad con las normas que dicte la autoridad de aplicación ...”. Eso es todo lo que dice. Quisiera decir que de ninguna manera habla de chip o de poner algo en la hacienda.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero.— Señor presidente: solamente quiero decir que voy a acompañar la posición de los señores senadores Ulloa y Maglietti. No es común en mí, pero lo voy a hacer porque creo que hay una modificación sobre el decreto de necesidad y urgencia, que en definitiva es la base de este proyecto. No comparto la modificación. Por lo tanto adelanto mi voto negativo a este artículo.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el senador Verna.

Sr. Verna.— Señor presidente: vamos a mantener el dictamen de comisión, compartiendo el criterio del senador por La Pampa de que esto se refiere a las plantas industriales y en lo que respecta al ganado se refiere a casos como el emblemático de Samid.

Nosotros estamos en contra de que los productores sean estafados por quienes tienen plantas frigoríficas “truchas”. Por eso vamos a mantener el dictamen.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el senador Carbonell.

Sr. Carbonell.— Señor presidente: comparto textualmente el artículo 12 tal como ha sido redactado en el dictamen de comisión. Creo que la parte que habla de los controles electrónicos es una incorporación de la modernidad; conozco los costos y no son como para generar alteraciones fundamentales en la estructura de costos.

El segundo párrafo, cuando dice: “Facúltase a la autoridad de aplicación a establecer sistemas electrónicos...”, se refiere a facultar.

Lo único que no entiendo del artículo es por qué habla de plantas industriales de faenamiento de hacienda y molienda de trigo nada más. Ahí yo propondría que se dijese “de grano”, en general. Creo que el sentido de las normas es controlar a la molienda de granos y no reducirla sólo al trigo, que es uno de aquellos granos.

Sr. Presidente (Genoud).— El 70 por ciento..

Sr. Carbonell.— No, no, señor presidente. Hoy el grano más importante es la soja.

Sr. Presidente (Genoud).— Hay una modificación propuesta por el senador Carbonell de reemplazar la palabra “trigo” por “grano”. ¿La comisión acepta?

Sr. Verna.— La comisión acepta.

Sr. Presidente (Genoud).— Se va a votar el capítulo II, artículos 12 y 13, con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud).— Queda aprobado por dos tercios.

—Se enuncia el capítulo III, artículo 14.

Sr. Molinari Romero.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero.— Solamente quiero plantear una corrección. Hay un error en el primer renglón de este artículo, que debe decir: facúltase al Poder Ejecutivo a “fijar” una comisión, en vez de “lijar”. Obviamente, se trata de un error de transcripción.

Sr. Presidente (Genoud).— ¿Se acepta la corrección gramatical?

Sr. Verna.— Sí, es exacto.

Sr. Presidente (Genoud).— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III, artículo 14, con la modificación propuesta por el señor senador por Córdoba.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el capítulo IV, artículos 15 a 31.

Sr. Molinari Romero.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero.— Señor presidente: quiero pedir una corrección, en virtud de lo que supongo es un problema de transcripción. Salvo que la Presidencia me diga que tiene otra copia.

En el artículo 21 figura como inciso *h*) un párrafo que creo que está caratulado como inciso por error, ya que debería figurar, simplemente, como un párrafo final de dicho artículo. Pero está incluido como un inciso a pesar de que es una consideración general sobre el artículo. Seguramente, es un error de la transcripción.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna.— Lo que dice el señor senador Molinari Romero es correcto; es el párrafo final.

Además, quiero aclarar que el artículo 16 tiene un cambio con relación a la sanción que viene de la Cámara de Diputados. Es decir, en el primer párrafo dice que quedan comprendidas “...las uniones transitorias de empresas o cualquier otra forma de asociación, que actúen como locatarios en las locaciones que se indican a continuación...” Y, en el original que venía de di-

cha Cámara luego decía: "Locaciones encuadradas...". Ahí nosotros hemos puesto *a)* y luego *b)*, porque en realidad se trata de dos incisos. Los diputados han omitido colocar el inciso *a)*. Esa es la corrección. Es solamente formal, de la misma manera que la indicada por el senador Molinari Romero.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: en el apuro olvidé señalar que, en el final del artículo 31, está mal incluido un anexo I, que debería figurar al final de la ley. Para evitar errores de interpretación, sería conveniente corregirlo...

Sr. Verna. – Así vino de la Cámara de Diputados. La idea fue no corregirlo, para no introducir un cambio que implica un criterio. Es decir, los diputados tuvieron el criterio de colocar el anexo al final del artículo.

Sr. Molinari Romero. – Pero debo suponer que es un error, señor presidente. Además, de todas maneras, el proyecto va a volver a la Cámara de Diputados. Entonces, ya que es un error, groseramente evidente...

Sr. Verna. – La comisión acepta que figure como un anexo de la ley.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo IV con las modificaciones propuestas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado por los dos tercios.

–Se enuncia el capítulo V, artículos 3.º a 36.

Sr. Molinari Romero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: me he tomado el trabajo de revisar la ley, como se dará cuenta.

En el artículo 33 me parece que falta un final en la redacción. Creo que hay un error evidente de omisión, por lo que luego de "...que los regulan", propongo que se agregue "resulte aplicable". De lo contrario, quedaría trunco el artículo. Evidentemente, es otro error de transcripción o redacción.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. – La corrección sería que dicho artículo 33 terminaría diciendo: "...que en virtud de las leyes especiales que los regulan resulte aplicable".

Sr. Molinari Romero. – Así estaba, incluso, en el dictamen de la Cámara de Diputados, por lo cual supongo que se trata de un error de transcripción.

Sr. Presidente (Genoud). – Entonces, ¿se acepta la modificación propuesta por el senador Molinari Romero?

Sr. Verna. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo V, artículos 32 a 36, con la modificación propuesta por el señor senador por Córdoba.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia y aprueba el capítulo VI, artículos 37 a 41.

–Se enuncia el capítulo VII, artículo 42.

Sr. Sala. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Sala. – Señor presidente: la presente modificación propuesta del artículo 42 solamente está referida al inciso *d)* del proyecto remitido por la Cámara de Diputados, y se enmarca en el objetivo de luchar por la vigencia estricta de la medida establecida por la ley 23.966, y que es sólo una mínima parte de la reparación histórica que la Nación debe a la región patagónica para integrarla al conjunto del país, adoptando para esto verdaderas políticas activas de Estado.

Como legislador nacional por el Chubut mi preocupación es la defensa irrestricta de la exención impositiva a los combustibles en la región patagónica, una verdadera y efectiva medida de carácter diferencial destinada a sostener la supervivencia de esta región, signada por las enormes distancias, la baja densidad poblacional y la falta de transporte ferroviario que satisfaga las demandas de la población.

Desde diciembre del año pasado asistimos con gran preocupación a sucesivas declaraciones del entonces titular de la Secretaría de Energía quien, basándose en la evasión que representa el contrabando de combustibles, manifestaba su voluntad de eliminar la exención citada. Fueron varios los embates al sistema vigente. En marzo de este año se propuso, desde el Poder Eje-

cutivo, sustituir el equivalente al impuesto sobre la transferencia de combustibles a las naftas patagónicas por el pago de un subsidio directo a cada una de las provincias afectadas. Me opuse entonces argumentando que el sistema vigente asegura que sean el usuario y el productor patagónico los destinatarios de esta medida compensatoria.

En el mes de mayo el Poder Ejecutivo nacional dicta el decreto de necesidad y urgencia 434/00 que, en su artículo 16, establece un peregrino sistema de fijación de un volumen tope de consumo de naftas exentas, pasado el cual requería un procedimiento para la devolución del impuesto abonado por los estacionarios, una especie de reintegro. Presenté entonces un proyecto de ley proponiendo la derogación de tal artículo, proyecto que aprobamos en la reunión del día de la fecha.

Las restricciones presupuestarias no justifican ausencia de controles. No ha existido, señor presidente y señores senadores, ni existe voluntad para controlar el contrabando. Insistimos en que se profundicen todas las posibilidades de control.

Hoy nos abocamos al tratamiento de esta ley antievasión, en cuyo artículo 42, inciso d), se vuelve a la carga con este tema, en el empeño de que los legisladores otorguemos jerarquía de ley a lo propuesto en el decreto 434. Es necesario poner el énfasis en la fiscalización del correcto funcionamiento del sistema vigente.

La redacción que proponemos en sustitución de la que viene aprobada por la Cámara de Diputados, y que restablece la plena vigencia de la ley nombrada, apunta a eso, a establecer un control apropiado, lo cual resultará mucho más económico que el grave e irreversible perjuicio que significará para las provincias patagónicas y la imposibilidad de una real incorporación de la Patagonia al territorio nacional.

Para decirlo en otras palabras, me niego a sustituir la indelegable función del control del Estado por la implementación de un sistema que desvirtuará la medida absolutamente.

Hemos asistido con anterioridad a numerosos casos en que un cambio en la implementación de un régimen lo desvirtúa por completo hasta hacerlo desaparecer. Es lo que se vislumbra para este caso particular.

La presente propuesta apunta a establecer el necesario control de la exención impositiva al

impuesto a la transferencia de los combustibles, otorgada por la Nación a las provincias patagónicas, incluyendo las destilerías, control que hasta el día de la fecha no se ha efectuado en ninguna oportunidad y al que consideramos fundamental, base de la posibilidad de contrabando que hoy se realiza. Ese control se ejecutará sobre los transportes terrestres y marítimos y sobre las bocas de expendio minoristas.

En el proyecto estamos señalando perfectamente los puestos claves de control, terrestres y marítimos, que aseguran la identificación del tránsito de combustibles a toda la Patagonia sur.

El contrabando actual está evaluado en unos 200 millones de pesos por año. El sistema de control que se ha propuesto está diseñado por los agentes especializados de la Dirección General Impositiva de la región.

Hemos consultado a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro. En mi provincia, el Chubut, este proyecto que hoy vamos a considerar fue aprobado, por unanimidad, por la comisión popular que defiende este tema, que encabeza el ex gobernador de la provincia del Chubut, el doctor Atilio Biglione, ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Esa comisión está integrada por todas las fuerzas vivas de la comunidad, de defensa del consumidor, de los productores y de las cámaras de comercio de toda la provincia, embanderadas todas en desenmascarar a los verdaderos contrabandistas, porque son ellos los que haciendo uso ilegal de esta medida, quieren eliminar este beneficio.

Estoy convencido de que la mejor forma de asegurar la continuidad de esta medida compensatoria para esta lejana zona de nuestro país es la aplicación de un eficiente sistema de control por parte del Estado. Está diseñado y presupuestado. Y representa, en cada uno de los puestos de control, 20 mil pesos por año con un sistema de informática interconectado que la DGI está en condiciones de prestar con su propio personal. No hay que nombrar una sola persona para efectuar este control. Es la forma de demostrar también que el gobierno nacional tiene voluntad política de mantener esta medida y no alentar otras acciones que nos desviarían del objetivo y nos harían sospechar que esta medida diferencial es víctima de políticas de ajuste, que traen como consecuencia el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros comprovincianos.

El sistema de cupos que se pretende asignar por estación de servicio se presta a actos de corrupción en los agentes que tienen que determinar los volúmenes que cada estacionero puede comercializar al público.

Es por estas razones que rechazamos el inciso *d*) del artículo 42 del proyecto venido de la Cámara de Diputados e impulsamos la aprobación de este sistema que consideramos eficiente, moderno y absolutamente compatible con las posibilidades de control informático con que contamos entrando en el siglo XXI.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Palacios.

Sr. Palacios. – Quiero proponer una modificación, señor presidente.

El texto está redactado de la siguiente manera: “La exención dispuesta en el inciso *d*) del artículo 7° de la presente ley se materializará mediante el siguiente sistema:...”.

La exención ya está materializada en la propia redacción del inciso *d*) del artículo 7°. Como bien señalaba el senador Sala, acá lo que se está haciendo es estableciendo un sistema de control.

Mi propuesta es que se modifique, que se cambie la palabra y, donde dice “materializará”, diga “controlará”.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Arnold.

Sr. Arnold. – Señor presidente: quiero adherir, en todos los términos, a la modificación planteada y a la fundamentación tan medulosamente realizada por el senador Sala. Y, como santacruceño, coherente con mi tarea legislativa desde su inicio, lo planteé en primer término, consciente por cierto de que era la única manera de castigar a los delincuentes que trafican, ya sea con la adulteración, el contrabando y todas las otras maniobras delictivas que se pueden llevar a cabo por medio de esto tan complejo que es el tráfico de combustibles. Si bien pareciera que lo más fácil es echar la culpa a la exención impositiva que tiene la Patagonia, coincido plenamente en señalar que lo que se debe hacer es controlar. Fue por ello que oportunamente presenté un proyecto sancionatorio de todos estos delitos, no permitiendo la excarcelación de quienes incurrieran en las infracciones que se pudieran detectar en este sentido. Es muy grande el monto de las maniobras que se hace con el contrabando de combustible,

dado que hay camiones que transportan más de 200 mil pesos en combustibles. Al respecto cabe destacar que la mayoría de los pozos de la cuenca neuquina son gasolineros, y la gasolina, que tiene un altísimo octanaje, es uno de los productos más utilizados para el estiramiento de combustibles. Es sabido que cuando algún camionero que transporta combustibles por 200 o 300 mil pesos comete estas infracciones, pagando una multa de 10 o 15 mil pesos, al otro día está nuevamente arriba del camión cometiendo las mismas infracciones.

Por ello se hacía imprescindible establecer un régimen sancionatorio no excarcelable para todos estos delitos, de forma de dar las herramientas que la AFIP y los organismos pertinentes necesitan para castigarlos adecuadamente.

Afortunadamente, esta cuestión también fue tomada por el proyecto de ley que antes de fines del año pasado enviara el Poder Ejecutivo, y consta como capítulo VI de la ley de reforma impositiva, o del impuestazo, como lo llamamos nosotros. Como decía, afortunadamente en el texto de esa ley quedó plasmado el régimen sancionatorio, que fue perfeccionado con ese proyecto que presentara yo oportunamente y que sancionáramos por unanimidad en este cuerpo y que actualmente está en la Cámara de Diputados.

Con estas palabras quiero dejar perfectamente claro que los santacruceños y los patagónicos vamos a defender con toda firmeza este beneficio que llega directamente al bolsillo de nuestra gente y que, probablemente, sea el único en el caso de mi provincia, que es la de mayor atraso relativo en el desarrollo industrial.

Por lo expuesto creo que es imprescindible la modificación planteada por el senador Sala respecto del artículo en consideración.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: adelanto mi voto positivo a la iniciativa que ha planteado el señor senador Sala. Creo que es un aporte importante a la transparencia la concesión de este tipo de beneficios de exención a una zona como la patagónica.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra la señora senadora Sapag.

Sra. Sapag. – Señor presidente: en el mismo sentido acompaño la posición del senador Sala.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente, señores senadores: cuando traté de fundamentar el proyecto de ley que estamos considerando dije muy claramente que me resultaba muy paradójico, dado que yo fui uno de los primeros que luchó para que se mantenga en toda la zona patagónica la exención a los combustibles, al menos en el impuesto a la transferencia, toda vez que me siento totalmente patagónico, como los señores senadores preopinantes.

¿Qué está ocurriendo aquí? Comparto plenamente los fundamentos a los que dio lectura el señor senador Sala. ¿Quién no los podría compartir?

Creo que todos los senadores que conocemos este país y la Patagonia sabemos que debe tener algún tratamiento diferencial. En eso huelgan las palabras; todos estamos de acuerdo.

En lo que diferimos es en el procedimiento, porque todos queremos evitar la evasión que produjo y que produce el contrabando. Y si estamos en la inteligencia de que con esta serie de puestos de control vamos a evitar el contrabando, personalmente y a esta altura de los acontecimientos y de todo lo que hemos luchado en la Patagonia contra el contrabando, lo veo muy difícil.

El señor senador Sala dijo que pareciera que no hay voluntad por parte del gobierno de luchar contra el contrabando, pero digamos la verdad. No la hubo tampoco en el anterior porque es un tema muy difícil. Aquí los camiones van y vienen de día y de noche y ha estado ocurriendo que no se pasaba el traslado de los camiones sino que había un manipuleo de facturas que se emitían en Buenos Aires y que nunca llegaban a la Patagonia.

Por lo tanto, lo que definiendo es que debemos seguir priorizando el impuesto a la transferencia de los combustibles en la Patagonia, pero en la medida en que los patagónicos la usemos y la dispongamos y no seamos incautos o creídos, diría, en el sentido de que con estas medidas vamos a resolver este problema.

Lo que sí puede ocurrir es que si seguimos de esta manera, la lucha contra el contrabando, que sabemos que no es nueva y que es difícil, no la vamos a poder ganar.

Por lo tanto, señor presidente, respeto y comparto los conceptos vertidos, que quede bien claro, porque mañana pueden aparecer los medios de la Patagonia diciendo que un patagónico se

niega o se opone a este derecho. No es así. Nada de eso ocurre. Estoy totalmente consustanciado con el objetivo.

Quiero seguir beneficiando a la región patagónica, pero en base a la no evasión, que debemos y tenemos la obligación de resguardar en este Parlamento.

Por lo tanto, señor presidente, respeto muchísimo la opinión vertida por los señores senadores colegas, pero en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical rechazamos el dictamen en mayoría porque adherimos al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y por la Cámara de Diputados de la Nación.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

La Presidencia le advierte que hablará por segunda vez con respecto al mismo tema.

Sr. Arnold. — Seré muy breve.

Señor presidente: no creo que entre patagónicos debamos hacer una competencia de quién fue el primero o el segundo.

Conozco bien al señor senador Altuna y sé que tiene el mismo compromiso que yo con la gente de la Patagonia y con los que gozan de este beneficio.

Lo que digo es que con este sistema de reintegros que se pretende implementar, en principio, lo que favoreceremos es el desabastecimiento porque los estacioneros, al tener que comprar a los precios que se venden en otro lado, sin la diferencia que tenemos en el sur, a los pocos meses probablemente sufrirán como consecuencia el desabastecimiento.

Por otra parte, hay que incentivar y tener voluntad de control. Solamente eso. Pasan trece o catorce camiones diarios hacia la Patagonia por dos rutas. Entonces, si no somos capaces de controlar con todos los sistemas que se mencionaron, hasta satelitales si fueran necesarios —que están perfectamente vigentes en otro lado—, es porque nos hace falta vocación para hacerlo. Y no modificar ni hacer mucho más engorroso el trámite.

Hay que controlar y evitar todo este tipo de sistemas complicados que nos pueden llevar a perder el beneficio, o producir el desabastecimiento del combustible.

Si no somos capaces de controlar catorce o quince camiones diarios que pasan al sur de Sierra Grande, mejor dediquémonos a otra cosa.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra la señora senadora Sapag.

Sra. Sapag.— Señor presidente: la mejor forma de evitar el contrabando es a través de una ley en donde se establezca que las expendedoras de combustibles tienen que facturar, y no recibir el combustible en consignación.

Porque en realidad, las que facturan son Shell, Repsol y Esso, y ni siquiera pagan impuestos en la provincia.

Asumo ese compromiso y apoyo lo mocionado por el senador Sala. Esta va a ser la única forma de evitar el contrabando.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Gagliardi.

Sr. Gagliardi.— Señor presidente: voy a contradecir al correligionario Altuna, manifestándole que me considero integrante del bloque de la Unión Cívica Radical.

Como me involucró en el rechazo a la modificación propuesta por el senador Sala, anticipo como patagónico que apoyo las modificaciones efectuadas por dicho senador.

Y le aclaro al senador Altuna que sigo perteneciendo a la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Varizat.

Sr. Varizat.— Señor presidente: es para manifestar que apoyo lo propuesto por el senador Sala.

Tengo plena convicción de que es la falta de controles lo que genera el contrabando de combustibles.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Preto.

Sr. Preto.— Señor presidente: en línea con lo que manifesté en el tratamiento en general, estoy absolutamente de acuerdo con lo expresado por los senadores de la Patagonia en el sentido de que toda vez que se tuvo un beneficio, luego se perdió por los abusos. Y no precisamente de los propios patagónicos.

En ese orden de cosas, comparto enfáticamente lo expresado por los senadores Sala, Arnold, Altuna y los demás colegas que me han precedido en el uso de la palabra.

Sin duda alguna, el problema no está en el consumo sino en la evasión.

En ese orden de cosas, nuestro bloque estaría dispuesto a votar este capítulo, siempre y cuando que, en pos del interés supremo de las

provincias de preservar la práctica de que una ley normal no puede afectar o modificar una ley convenio, se agregue al final de este capítulo una frase que diga: “Invítase a las provincias a adherir en un plazo de 180 días a lo establecido en el presente capítulo”.

Si no fuera así, lamentablemente nuestra bancada no va a votarlo afirmativamente, porque no privilegiaríamos el interés superior de preservar los intereses de la provincia, ya que se estaría modificando la ley 23.966 —que es una ley convenio—, a través de una ley que no lo es.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Sáez.

Sr. Sáez.— Señor presidente: voy a votar positivamente el proyecto del senador Sala, porque entiendo que es en beneficio de toda la Patagonia.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Costanzo.

Sr. Costanzo.— Señor presidente: quiero destacar el trabajo del señor senador Sala en procura de la modificación de este artículo.

Obviamente voy a adherir fervorosamente, porque sabemos la importancia y la trascendencia que tiene el tema del combustible para la Patagonia.

En consecuencia, adelanto mi voto afirmativo a la reforma planteada por el señor senador Sala.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna.— Señor presidente: vamos a aceptar la modificación propuesta por el señor senador Palacios, en el sentido de modificar una palabra del inciso *d*). Y por supuesto, el dictamen de comisión con la propuesta del senador Sala.

Sr. Presidente (Genoud).— ¿Puede concretar la moción, senador Verna?

Sr. Verna.— Yo la concreté. Lo que pasa es que usted estaba distraído.

Sr. Presidente (Genoud).— Exactamente. Por eso se lo pedí, con toda humildad.

Sr. Verna.— Le agradezco el reconocimiento.

Mantenemos el dictamen de comisión, en el que se ha incorporado la propuesta del senador Sala; y en el inciso *d*) se cambia la palabra “materializará” por “controlará”.

Sr. Presidente (Genoud).— Se va a votar según lo señalado por el senador Verna.

Tiene la palabra el senador Massaccesi.

Sr. Massaccesi. — Señor presidente: como estamos en una semana de sinceridad política, creo que con este tema de la Patagonia corresponde hacer una buena referencia a cómo nació esta iniciativa.

Este tema nació —los senadores de Santa Cruz no me van a dejar mentir— en vísperas de una elección cuya fecha no recuerdo, cuando el ministro Cavallo llevó este beneficio a la ciudad de Río Gallegos, lo que produjo un gran debate en la Patagonia porque nos partió la región en región privilegiada y región no privilegiada por el beneficio. A partir de allí, hubo una Patagonia Norte y una Patagonia Sur. Esto se sumó al debate histórico que tenemos por lo menos en Río Negro respecto a los límites de la región en los ríos Colorado y Barrancas.

Luego fuimos extendiendo el beneficio casualmente también en función de las fechas electorales, a tal punto que en mi provincia de Río Negro el beneficio fue dado cuarenta y ocho horas antes de la última elección nacional.

Entonces, cuando se habla del concepto de región, integración, desarrollo, yo creo que además hay que incluirlo dentro de un concepto de país para ver qué hacemos realmente para salir, en un país enfermo de centralismo, de este botín electoral que se genera en cincuenta kilómetros alrededor del Obelisco; y tenemos que sincerar los discursos, cifras, luchas y desprotecciones de cada una de estas regiones del país.

A mi juicio, si nosotros aplicáramos las leyes vigentes, no tendríamos que estar votando este proyecto. Si tuviéramos funcionarios responsables, la Justicia funcionando, los juzgados federales funcionando, los ciudadanos denunciando, no tendríamos que estar debatiendo dos o tres horas sobre un verdadero contrabando interno que ha generado una serie de privilegios, fortunas mal habidas y desigualdades. Hay una población de mi provincia de Río Negro en la que la principal industria es la radicación de estaciones de servicio, cuando sabemos todos que es una actividad que está prácticamente quebrada en todo el país por la mala relación que se ha generado y la debilidad que se tiene con las petroleras.

Voy a acompañar el proyecto. Mi provincia está partida por el beneficio. Hay rionegrinos de primera y de segunda. La provincia del Neuquén tiene los mismos beneficios. Lo hemos extendido en un caso con el nombre de calidad turística, otro con el de calidad de protección de

los pueblos. Algunos lo pidieron para otras provincias porque los tenemos en la Patagonia. Me parece que todo esto, por lo menos no es serio. Pero voy a acompañar el proyecto del senador Sala porque seguramente apunta a que esto funcione un poco mejor. Pero no con esto me doy por satisfecho ni creo que estemos solucionando el problema.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Martínez Almudevar.

Sr. Martínez Almudevar. — Señor presidente: nosotros también somos patagónicos. Como integrantes de la Patagonia, apoyamos este proyecto, a pesar de que la provincia de La Pampa está excluida de los alcances de este beneficio. Pero es una manera de ratificar nuestra pertenencia; no andamos con especulaciones regionales.

Sr. Presidente (Genoud). — Senador Arnold: usted ha hablado dos veces en la consideración de este artículo. Sería la tercera vez... (murmillos en las bancas). Me parece que es un abuso. Hay casi un tono monocorde de los senadores; está todo el mundo absolutamente de acuerdo.

Se va a votar el capítulo VII, artículo 42, como lo ha informado el miembro informante.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). — Queda aprobado por dos tercios.

—Se enuncia y aprueba el capítulo VIII, artículos 43 a 48.

— Se enuncia el capítulo IX, artículos 49 a 52.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa.— Señor presidente: el artículo 51 habla de los contenedores. No sé si el señor miembro informante podrá aclararme el tema, pero sucede que un contenedor cuesta...

Sr. Presidente (Genoud).— Señores senadores: por favor, respeten al senador Ulloa que está en uso de la palabra.

Sr. Ulloa.— Un contenedor cuesta entre mil y mil quinientos pesos y nosotros estamos poniendo multas que llegan a los nueve mil pesos, y vencido ese término, se procederá al remate.

Me parece que aquí hay una incoherencia entre el valor de un contenedor que se pretende nacionalizar por mil doscientos pesos y el esfuerzo de contralor que más los gastos del re-

mate no van a compensar su costo. En algún momento, hubo un proyecto por el cual se declaraba la entrada libre de los contenedores. De manera que no entiendo muy bien cuál es el objetivo de perseguir la nacionalización de los contenedores después de un cierto plazo.

Quisiera que el señor miembro informante me lo explicara.

Sr. Presidente (Genoud).— Tienen la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna.— Señor presidente: hay modificaciones en el artículo, de acuerdo con el dictamen, que va a presentar el senador Carbonell, y que contribuyen a lo que menciona el senador Ulloa.

Sr. Carbonell.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell.— Señor presidente: la modificación que prevé el texto del dictamen de la comisión del artículo 46 de la ley 24.921, tiene el sentido que enunció el senador Ulloa; se trata de evitar una grave distorsión que se está produciendo por imperio del artículo que he citado, en el sentido de que los contenedores que quedan por más de un tiempo breve tienen multas diarias altísimas que llevan a distorsionar el mercado y a aumentar artificialmente el llamado costo argentino. Muchos contenedores proveen materia prima para industrias nacionales o, a veces, aumentan artificialmente el costo de las exportaciones argentinas que se hacen en esos contenedores que vienen llenos con importaciones y tienen que volver con exportaciones.

Por eso, el artículo prevé una modificación que lleva el plazo a los 480 días corridos, lo que nos parece razonable para evitar cualquier tipo de demora o de multas artificiales a este moderno mecanismo de transporte internacional.

Pero queda subsistente algo. En este momento hay numerosas actuaciones administrativas por las multas y muchos cargos por las multas existentes. Por lo tanto, voy a proponer que en la modificación del artículo 46 se elimine el tercer párrafo del dictamen de comisión y se lo sustituya por el siguiente texto: “Decláranse remitidos de pleno derecho conforme a lo determinado por los artículos 877 y concordantes del Código Civil las condonaciones pecuniarias impuestas en virtud del segundo párrafo del artículo 46 de la ley 24.921. Igualmente, declárase la caducidad de los procedimientos administrati-

vos y judiciales promovidos a efectos de aplicar o percibir las multas indicadas en el artículo 53”. Este texto obra en Secretaría y pido que se apruebe el artículo en consideración con esta modificación.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Verna.— Se acepta la modificación propuesta por el señor senador Carbonell. Creo que al ampliarse el plazo y condonarse la deuda está contemplado lo que planteaba el señor senador Ulloa.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero.— Entiendo que estamos tratando el último capítulo. Hubo una propuesta del señor senador Altuna, cuando se hizo la exposición en general, en el sentido de dejar perfectamente claro que se deroga el decreto de necesidad y urgencia.

Sr. Verna.— Sí.

Sr. Molinari Romero.— Pido al presidente que lo contemplemos como un artículo específico.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el senador Verna.

Sr. Verna.— Agregaría como artículo 52: “Derógase el decreto 434...”, al que se refirió el senador Altuna durante su exposición en general.

Sr. Presidente (Genoud).— Tiene la palabra el senador Altuna.

Sr. Altuna.— Señor presidente: en mi exposición en general he dicho que el Poder Ejecutivo ha entendido que debe eliminarse el bloqueo fiscal que viene previsto en uno de los artículos que aprobó la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, para seguir un orden cronológico, propongo a la Presidencia que ponga en consideración del cuerpo la reinstalación de un artículo que diga: “Derógase a partir de la sanción de esta ley el régimen especial de fiscalización previsto en el capítulo XIII de la ley 11.683, texto ordenado en 1998, y sus modificaciones”. Después, debería seguirse con el párrafo segundo, en el cual está perfectamente claro que no se perjudican derechos adquiridos, de ninguna manera.

Lo que sí se quiere evitar —como lo dije anteriormente— es que todo contribuyente de la AFIP, una vez sancionada esta ley, quede expuesto a la verificación. De este modo, no se

restablecerá el bloqueo fiscal que daba inmunidad por años precedentes, ante la propia fiscalización.

Quiero que la Cámara considere este tema porque no es menor. Justamente, hace a uno de los centros neurálgicos de la ley antievasión. Todos debemos presentar nuestras rendiciones impositivas y debemos hacerlo como manda la ley.

El Poder Ejecutivo ha considerado impracticable e ineficiente el régimen de bloqueo fiscal hasta este momento existente. Por eso solicito que se ponga en consideración de este honorable cuerpo esta situación.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: mantenemos el dictamen de la comisión; mantenemos la derogación de la derogación. Es decir, mantenemos el sistema de bloqueo por cuanto hay gran cantidad de gente que se ha presentado a la moratoria y, según nuestro criterio, esto daría lugar a una inseguridad jurídica en cuanto a que se podrían volver a revisar las presentaciones de quienes espontáneamente han reconocido haber cometido irregularidades en pagos anteriores. Por eso mantenemos el bloqueo fiscal.

A fin de facilitar la votación, diría que la propuesta del senador Altuna es incorporar, como artículo 49, el artículo 49 que vino de Diputados. Nos oponemos. Someta a votación sólo ese artículo y, con el resto, creo que coincidimos.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el senador Altuna.

Sr. Altuna. – Señor presidente, señores senadores: con todo respeto, quiero decir que con la redacción que queremos para este artículo de manera alguna se afectan derechos adquiridos. Al extremo que se dice que a partir de la sanción de esta ley se deroga el bloqueo fiscal. O sea que lo que ocurre es que de ahora en más los contribuyentes no tendremos el beneficio de que en la actualidad gozamos. Como dice recién, esto tiende a evitar todo tipo de especulación que se pueda hacer cuando usted presenta su declaración de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

De ninguna manera se afectan derechos adquiridos, a tal punto que los que en este momento son objeto de inspección –así se indica– quedan resguardados, porque ellos sí tendrían un derecho adquirido ya que están bajo inspección.

Pero en cuanto a usted, a mí o a cualquier contribuyente que no haya tenido ese beneficio no rige más hacia los tiempos por venir. Entonces, alguien mal podría hablar de que le están conculcando derechos adquiridos.

Quizá algunos piensen que podrían seguir con esta expectativa favorable de que les revisen el último año y les prescriban para la inspección cuatro o cinco años anteriores; pero ese es otro tema.

Nosotros consideramos con todo respeto que aquí no hay ninguna conculcación de derechos adquiridos. Aquí lo que existe es una política de Estado que considera que esta situación no debe existir hacia adelante, hacia el futuro; y esto hace también al corazón de la ley que estamos tratando, señor presidente.

Por lo tanto, yo insisto en pedir la reconsideración de este tema a los señores senadores. Es muy importante su inclusión en esta norma realmente trascendente, que es la ley que todos venimos demandando hace tiempo para luchar contra este cáncer que tenemos los argentinos que es la evasión impositiva.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: mantenemos el dictamen de la comisión.

Sr. Branda. – No nos convenció.

Sr. Presidente (Genoud). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo IX, artículos 49 a 52 inclusive.

En primer lugar, vamos a someter a votación el texto del dictamen de comisión tal cual lo informara el señor senador Verna, con la precisión formulada por el señor senador por Tucumán.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda aprobado.

Sr. Altuna. – ¿Por cuántos votos, señor presidente?

Sr. Presidente (Genoud). – Con los dos tercios muy ajustados.

–El artículo 53 es de forma.

Sr. Presidente (Genoud). – Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Branda.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que durante todo el tratamiento de este proyecto de ley no estuvo presente en el recinto el señor senador Del Piero.

Esto muestra a las claras que no tienen ganas de legislar ni de actuar en esta Cámara.

Que quede constancia, señor presidente.

Ocurre que algunos senadores peronistas expresaron en las últimas horas sus sospechas de que la demora que sufrió en llegar a la Cámara alta el expediente se debió a que antes había pasado por la sede gubernamental.

Voceros del vicepresidente argumentaron que en realidad esa declaración se trató de “un error o un furcio” de su jefe, y posteriormente difundieron un comunicado oficial con el que buscaron aclarar sus declaraciones.

En ese texto se informó que el expediente,